inprecor

Nº85 • Julio 1991 • 325 pesetas



NICARAGUA. El dilema del ejército sandinista. *Eric Toussaint.* **CUBA.** Vísperas del IV Congreso del PCC. *Janette Habel.* **URSS.** La lucha de las minas, desde dentro. *David Seppo.* **ORIENTE MEDIO.** El "nuevo orden árabe" y el obstáculo israelí. *Salah Jaber.* **HUNGRIA.** Del "comunismo" del gulash al capitalismo real. *Henri Wilno.* **TEMA.** Debates ecologistas. *Lochhead, Hildyard, Bandiera Rossa.*

sumario

Número 85. Julio 1991

inprecor

Revista política bimestral editada por la Liga Comunista Revolucionaria

Director: Miguel Romero
D.L.: 40029/79

Correspondencia:
Apartado de correos 50370
28080 Madrid

Boletín de suscripción

Anual (ocho números)
Estado Español 2500 ptas. (impreso) 3500 ptas.(carta)
Europa 50 dólares. **Resto del mundo**,60 dólares

Forma de pago: Talón o transferencia bancaria, a:
LCR, cta. cte. 01-504000 -2, Banco Bilbao, Madrid.

Contra reembolso: enviar carta.

Nombre: ....
Dirección: ....
C.P.: .... **Localidad:** ....
País: ....



revista quincenal en francés, publicada bajo responsabilidad del Secretariado Unificado de la IV Internacional

Suscripción anual (25 números): 280 FF.
Envío por avión: 310 FF.

Forma de pago: transferencia bancaria a:
PEC. BNP agencia Robespierre, 153 rue de Paris. 93108 Montreuil. France. Número de cuenta: 230179/80.

85

Cuando este número de Inprecor esté en manos de los lectores se habrá celebrado ya el Congreso del FSLN, a cuyo desarrollo dedicaremos, por supuesto, un amplio espacio en los próximos meses. Voces autorizadas de la dirección del FSLN vienen insistiendo desde hace tiempo en que no se esperen grandes novedades de ese Congreso que tendrá, dicen, un carácter "de transición" y de afirmación de la unidad sandinista. Dada la gravedad de los problemas nicaragüenses -agudizada en vísperas del Congreso por los conflictos sobre la pretensión del gobierno Chamorro de anular las expropiaciones que realizó la revolución- y dado que han aparecido posiciones bien diferenciadas en las filas sandinistas sobre numerosos e importantes problemas, sorprende e inquieta que el Congreso mismo aparezca como un acto un tanto formal, según la opinión de portavoces del FSLN. Ya veremos que dan de sí los acontecimientos.

Puede ser una buena ayuda para entenderlos la lectura del trabajo de Eric Toussaint que tiene la ambición de ser un balance global de la política de transición que inauguraron los acuerdos Lacayo-Hunmberto Ortega. Toussaint traza un panorama muy preocupante (que todo indica que está muy próximo a una realidad que el autor conoce bien, por el seguimiento día a día desde hace muchos años y por viajes y relaciones muy estrechas con militantes y dirigentes sandinistas. Las conclusiones y valoraciones de Toussaint a partir de estos hechos nos parecen en algunos puntos muy discutibles, pero eso en nada reduce el interés de su trabajo.

Como prometimos, publicamos la segunda parte del trabajo de Jannete Habel sobre la situación cubana. Habel junto con Alain Krivine acaba de realizar un viaje a Cuba; esperamos que escribira nuevos artículos próximamente a partir de su visión directa de la situación y de los encuentros y debates que allí ha realizado con diferentes responsables del PCC. Si su primer artículo se refería a las cuestiones económicas, en esta segunda entrega analoza los problemas político-sociales en vísperas del IV Congreso del PCC el cual, por cierto, también es presentado por muchos portavoces como algo de lo que no hay que esperar grandes novedades, ni grandes debates, que tednrá un carácter "de transición", etc. Mala cosa ésta, cuando la necesaria afirmación de la unidad de una organización política en una situación crítica tiene que basarse, al menos hacia fuera, en la inexistencia de discusiones, no pronunciarse concretamente sobre los grandes temas que preocupan a la gente (y que, sin duda, discute la cúpula de la dirección), etc. El tema es especialmente grave por el papel que para el futuro de la revolución cubana tendrá, como señala Habel, la lucha antiburocrática, que no podrá resolverse por la acción personal de Fidel, sino que exigirá una participación amplia de masas.

Habíamos anunciado también la publicación de una extensa entrevista de David Seppo con uno de los dirigentes de las luchas mineras de la URSS. Alexandre Sergueev es un trabajador inteligente y honesto que habla muy francamente sobre cómo ve los problemas de su clase y de su país. Pocas veces hemos leído textos donde aparezcan con tanta claridad las contradiciones que existen, incluso en lo que podemos considerar la vanguardia del movimiento obrero de la URSS. En todo caso, esta entrevista es uno de los pocos textos estimulantes que nos han llegado del Este en mucho tiempo.

Salah Jaber continúa con sus análisis de la situación de la post-guerra del Golfo. En esta ocasión estudia uno de los problamas más complejos que quedan pendientes: los intentos de establecer un "nuevo orden árabe", lo que exige una solución estable de la cuestión palestina.

El sumario se completa con un análisis de Henri Wilno sobre los efectos de la política del gobierno Antall en Hungría.

Un retraso en la llegada del texto que teníamos previsto nos ha obligado a improvisar una solución de recambio para el TEMA. Publicamos dos textos sobre temas ecológicos, que tienen la calidad habitual en esta sección, pero no tienen las dimensiones normales. La sección recuperará su formato habitual en el próximo número.



Humberto Ortega y Violeta Chamorro

Nicaragua

El dilema del ejército sandinista

Eric Toussaint

Como se ha podido comprobar en las últimas semanas la situación en Nicaragua es muy compleja y está lejos de haberse estabilizado; en ese marco la actuación del EPS puede llegar a ser fundamental. El artículo que publicamos a continuación recoge la opinión, documentada y necesariamente polémica, de un colaborador habitual en estas páginas sobre este delicado tema.

Más de un año después del traspaso de poderes del 25 de abril de 1990, entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Unión Nacional Opositora (UNO)(1), los pilares del Estado revolucionario están en vías de desmantelarse, sin que se vea cómo se puede detener el proceso, y mucho menos invertirlo.

El desarme de la población civil, llevado a cabo por el Ejército Popular Sandinista (EPS), ha alcanzado proporciones importantes: decenas de millares de armas han sido recuperadas y el general Humberto Ortega afirma que "La reconciliación nacional se impone gradualmente, dejando a un lado a las minorías extremistas de izquierda y de derecha, se ha ganado la paz y nosotros estamos por consolidarla mediante el desarme total de los civiles (...); la reducción y profesionalización de las Fuerzas Armadas es evidente, la Asamblea Nacional funciona de manera

Notas

1.- "Inprecor" francés 307 y 310 (20-4-90 y 1-6-90)

2.- "El Semanario", 28-2-91

3.- Oficiosamente, Javier Pichardo habría sido acusado de mantener relaciones con la derecha y su periódico, "La Prensa"; de querer "autonomizar" el ejército del aire y de haber querido reprimir a los huelguistas de julio. Oficialmente, sólo ha sido acusado de tener "una particular concepción" del ejército.

4.- "Inprecor" francés 313 y 314 (13-7-90 y 14-9-90)

5.- "Nicaragua Desde Adentro", nº 6, 15-7-90

6.- Según Humberto Ortega, antes de la toma del poder "el FSLN estaba dividido en tres tendencias y no por simples divergencias tácticas; hubo diferencias de contenido estratégico con la tesis de la Guerra Popular Prolongada, que dirigía Tomás Borge, y con la llamada Proletaria (dirigida entre otros por Jaime Wheelok y Luis Carrión. Ndlr). Si una de esta dos tendencias hubiera triunfado en la discusión, no habríamos tomado nunca el poder en Nicaragua. Ha predominado la tendencia más justa, la tendencia "tercerista", "insurreccional", que nosotros dirigimos. Actualmente, asistimos a la misma cosa". Entrevista concedida a "Brecha", de Uruguay, el 17-8-90, citada por "La Prensa" del 12-9-90.

democrática, aislando a los extremistas"(2).

Los efectivos del EPS han pasado de 90.000 en febrero de 1990, a 28.000 a finales de diciembre de 1991, habiendo sido licenciados 5.000 oficiales. Al mismo tiempo asistimos a la marginación de algunos de sus elementos de izquierda (la exclusión del coronel Pichardo de la dirección del ejército del aire y de los cuadros del EPS, en agosto de 1990, es representativa de un movimiento más amplio)(3).

La Policía Sandinista, rebautizada Policía Nacional, está bajo las órdenes directas del gobierno, que la utiliza para llevar a cabo un número creciente de acciones contra los huelguistas. Ha habido depuraciones en su seno y la moral de sus oficiales sandinistas está a cero. Pero todo esto no le basta al gobierno, que multiplica los nuevos cuerpos policiales, reclutando antiguos contras. Ahora se plantea constituir una "guardia urbana y rural" (nombre que recuerda el de la siniestra Guardia somocista).

El Area de Propiedad del Pueblo (APP, sector nacionalizado) está en vías de privatización, con la aprobación de los sandinistas, desde la firma de los acuerdos de concertación de octubre de 1990. Las empresas agrícolas e industriales son devueltas a sus antiguos dueños o vendidas. El sistema bancario, estatalizado en 1979, podría ser también parcialmente privatizado, en contradicción con la Constitución, pero de acuerdo con una parte de los sandinistas. En fin, el monopolio de Estado sobre el comercio exterior se ve también amenazado.

Resistencia popular

El sistema de salud, la educación y los servicios culturales están cada vez peor. El sistema de televisión sandinista (STV) ha sido desmantelado, y los sandinistas no cuentan más que con algunas radios privadas (sólo una tiene cobertura nacional) y un programa de Televisión de corta duración -que puede ser suspendido por el gobierno, como ya ocurrió temporalmente durante las huelgas de julio de 1990-.

Este proceso de desmantelamiento de los pilares del Estado revolucionario no se está haciendo en frio: las medidas contrarrevolucionarias han tenido que afrontar varias oleadas de huelgas con ocupación de tierras y empresas y levantamientos de barricadas(4).

Aunque estén a la defensiva, las organizaciones populares juegan un papel reivindicativo de un raro vigor en la historia de Nicaragua. Pero, como podía intuirse desde la huelga general de julio de 1990, esta actividad social no es suficiente para clarificar la estrategia del FSLN en la actual fase; sus errores de juicio sobre la coyuntura nicaragüense e internacional pesan en su crisis interna.

La llave de la situación la tienen en gran medida las decisiones que tomará el Frente durante su primer congreso, en julio de 1991. Tras la derrota electoral, se planteó la cuestión del mantenimiento o no del EPS. La burguesía, si bien hegemonizaba de nuevo el gobierno, no disponía de una fuerza armada capaz de imponer una derrota definitiva a las masas populares.

¿Al servicio de quién?

La abolición del EPS figuraba en el programa de la UNO. Pero ¿con qué podía remplazarse? ¿Cómo encontrar una fuerza capaz de ocupar el puesto de un ejército salido de una auténtica revolución; cuyos cuadros, del primero al último, provenían de la guerrilla antisomocista? ¿Un ejército que había combatido con éxito la agresión exterior y la contrarrevolución armada interior? Abolir el Ejército Sandinista y sustituirlo por la Contra era imposible: la guerra civil habría sido inevitable, dado que la UNO había prometido la desmovilización de la contrarrevolución.

La burguesía se dio cuenta de que, si bien tenía el gobierno, no controlaba de igual forma la base del Estado, que le era extraña y hostil y que era poderosa. La UNO decidió entonces contemporizar, ya que no tenía otra elección. Los sandinistas, a cambio de la promesa de no recurrir al ejército para reconquistar el terreno perdido, obtuvieron el mantenimiento del EPS y de su estructura de mando. Humberto Ortega permaneció en su puesto de comandante en jefe.

No obstante, el FSLN tuvo que hacer concesiones: la presidenta Violeta Chamorro recibió el poder de dirigir el ejército cuando quisiera y de destituir a H. Ortega; los efectivos del EPS fueron reducidos drásticamente; los cuadros del ejército, empezando por Humberto Ortega, debían abandonar su militancia en el FSLN. Por último, la UNO puso a prueba la fiabilidad del EPS, confiándole misiones de mantenimiento del orden frente al movimiento popular. Estas concesiones abrieron un debate en el FSLN.

Aparentemente, si bien nadie propuso utilizar al ejército para retomar el poder a corto plazo, uno de los sectores sandinistas más críticos respecto a la línea política seguida por H. Ortega (militantes provenientes de la antigua tendencia Guerra Popular Prolongada, GPP), que edita la revista "Nicaragua Desde Adentro", ha declarado: "No puede negarse que el hecho de que los jefes del ejército y una parte de las tropas sean sandinistas constituye una ventaja para el FSLN -más allá de que los militares, formalmente, no pueden militar en el Frente- porque esto significaría que, en última instancia y llegado el caso, el FSLN tendría bajo sus órdenes una fuerza militar organizada que podría apoyar una eventual sublevación popular contra el gobierno". Esta perspectiva ha sido totalmente excluida por Humberto Ortega, así como por otros dirigentes sandinistas.

"Nicaragua Desde Adentro" explicaba: "Sin embargo, no será menos obvio que la subordinación del ejército al poder ejecutivo establece de manera implícita su apoyo a ese sector hegemónico de la burguesía, privilegiando así su carácter profesional y constitucional frente a su origen político sandinista"(5).

El texto insistía, a continuación, en el hecho de que el EPS iba a ser objeto de una lucha entre el gobierno burgués y el FSLN, en la que el gobierno buscaría sobre todo "seducir" a los cuadros clave del ejército. El ataque, apenas velado, contra la línea de H. Ortega se amplió con una crítica muy dura a la estrategia militar y política del EPS en los años 80 y a la línea económica aplicada a partir de 1988, bajo iniciativa del sector próximo a los hermanos Ortega. Este ataque, hecho público por gente cercana al comandante Tomás Borge, tiene sin duda que ver con los duros comentarios de Humberto Ortega referidos al antiguo ministro del Interior(6).

Pero no está claro que esta alternativa a la línea económica y política de los años 80, expuesta por el sector próximo a Borge, fuera defendida por ese mismo sector de manera sistemática dentro de la dirección del FSLN. El hecho de que el 25 de abril de 1990 Humberto Ortega decidiera continuar al frente del ejército, abandonando sus tareas en la dirección del Frente, fue criticado por partidarios de la antigua tendencia GPP. Según estos, H. Ortega podía haber sido sustituido por su segundo, el comandante Cuadra, a la cabeza del ejército. A Ortega se le reprocha haber preferido su papel de hombre de Estado y jefe militar al de miembro de una dirección colectiva. Más allá de esta crítica, no se tienen noticias de ninguna línea alternativa defendida por un sector de izquierda.

El EPS en el banquillo

El EPS se vio especialmente puesto a prueba con motivo de la huelga general de julio de 1990, cuando se levantaron centenares de barricadas en Managua respondiendo a un llamamiento del Frente Nacional de Trabajadores (FNT), que agrupa a las organizaciones sindicales sandinistas. El ejército tuvo que abrir todos los días, con excavadoras, las principales arterias de la capital, pero sin enfrentarse en ningún momento con los trabajadores, que le dejaban hacer lo que le había ordenado el gobierno. Cuando el ejército se retiraba,

los militantes sandinistas reconstruían las barricadas, a veces con ayuda de militares vestidos de civiles... El problema no era que el gobierno pecara de ingenuidad, sino que la movilización era muy fuerte y el ejército estaba demasiado de uñas como para que la UNO le ordenara atacar a los huelguistas. Fue necesario que la dirección nacional del FSLN hiciera uso de toda su influencia sobre el gobierno, por una parte, y sobre el FNT, por otra, para que se llegara a un compromiso (insuficiente) y se pusiera fin a la huelga.

Con motivo de la firma de los acuerdos H. Ortega dio seguridades al gobierno, señalando que el EPS seguiría sus órdenes y las de presidencia, que organizaría el desarme de civiles (las barricadas se defendían durante la noche por gente armada), pero precisó que el EPS no abriría jamás fuego contra trabajadores.

Se agilizó el ya iniciado desarme de civiles, que está aún lejos de terminar: decenas de miles de armas continúan en manos de la población, gran parte en manos de militantes sandinistas.

Godoy y sus "chicos"

Algunos meses más tarde, el EPS tuvo que hacer frente a otro desafío, proveniente esta vez de la derecha. En noviembre de 1990 tuvo lugar una sublevación de autoridades locales de la Región V, los departamentos de Boaco y Chontales -en el centro del país, región ganadera pobre, antiguo feudo de la Contra donde la UNO resultó ampliamente mayoritaria en las elecciones de 1990-, apoyados por antiguos contras en armas. Cortaron la carretera estratégica que une Managua con la Costa Atlántica, por la ciudad de Rama, bloqueando 300 kilómetros de carretera. La acción fue orquestada por la extrema derecha de la UNO, dirigida por el vicepresidente de la República, Virgilio Godoy.

Los alcaldes reivindicaban la destitución del ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo (eminencia gris de Violeta Chamorro y defensor del compromiso con los sandinistas), del ministro del Interior, Carlos Hurtado, y del general Humberto Ortega; la retirada del EPS y de la policía de la Región V; la reducción del presupuesto de Defensa; la constitución de una policía rural, formada por ex-contras; el desarme de civiles; la asignación de tierras a antiguos contras, en detrimento de la APP y del EPS; atribución de funciones reales a Virgilio Godoy (debido a sus divergencias con el clan Chamorro-Lacayo-César, Godoy no ejerce, efectivamente, ninguna función en el ejecutivo).

El responsable militar de esta sublevación era Arístides Sánchez, agente de la CIA y antiguo consejero de la Contra, que finalmente fue detenido y "expulsado" a Estados Unidos sin condena alguna(7). Esta acción estaba destinada a desestabilizar al gobierno de Violeta Chamorro y a obligarle a golpear más duramente al EPS. Chamorro y el EPS tuvieron que aceptar una re-



7.- "Nicaragua Desde Adentro", nº 13-14, 30-12-90

8.- En un primer momento, el EPS había pedido un presupuesto de 131 millones de córdobas-oro, que quedó reducido a 78'1 millones, lo que representó un duro retroceso. El presupuesto de Defensa para 1991 se ha reducido en un 56% en relación al de 1990. Ver "Envío", Managua, febrero de 1991

9.- "Envío", Managua, febrero de 1991

10.- "Inprecor" francés 326, 15-3-90.

ducción del presupuesto dedicado a este último, más importante de lo previsto(8).

La "rebelión de los alcaldes" tuvo repercusión en los debates y las votaciones de la Asamblea Nacional. En un primer momento, sólo los 33 diputados sandinistas habían votado a favor del presupuesto de Defensa presentado por la presidenta, mientras que la UNO en pleno votó en contra. Chamorro tuvo que utilizar entonces su derecho de veto para salvar el voto negativo de la mayoría. Esto le permitió ganar tiempo y negociar con los dirigentes del grupo parlamentario de la UNO, lo que condujo a una reducción suplementaria de 8'5 millones de córdobas-oro en el presupuesto militar. Sólo a ese precio pudo finalmente Violeta Chamorro conseguir el acuerdo de la Asamblea.

La presidenta habría declarado a los dirigentes parlamentarios de la UNO que "la destitución del general Humberto Ortega forma parte de mis proyectos, pero en un plazo indeterminado"(9). A tenor de las discusiones con la presidenta, uno de los líderes de la derecha de la UNO, A. Ubilla, explicó a "La Prensa", el 7 de enero de 1991: "Debemos ser conscientes de que las ventajas de que dispone el sandinismo no son producto de la simple voluntad de Doña Violeta Chamorro. Su gobierno ha nacido sin armas, sin soldados, sin policías y sin dinero, y se ha tenido que enfrentar a un partido derrotado que dispone de todo lo que le falta al gobierno. Hay que hacer gala de una gran sutileza y paciencia para dirigir los intereses de la nación".

Evidentemente, diagnosticaba con acierto: comprendía que el Estado revolucionario no está desmantelado del todo y que eso lleva su tiempo; pero seguramente piensa también que ese desmantelamiento está en vías de realizarse y que el clan Chamorro-Lacayo no dirige tan mal el proceso. De hecho, el EPS ha pagado caro las sublevaciones armadas de los alcaldes y la indisciplina de los diputados de UNO.

En diciembre de 1990, gracias a la ayuda de la Unión Soviética, la administración Bush pudo probar que el FMLN salvadoreño había podido utilizar misiles SAM 7 y SAM 14, suministrados por los soviéticos al EPS en 1986, para abatir, en noviembre de 1990, helicópteros suministrados por Estados Unidos al ejército de El Salvador(10).

La crisis de los misiles

El ministro de Exteriores de la URSS declaró públicamente que esperaba que las autoridades nicaragüenses pusieran fin a tales acciones. Para salir del apuro la dirección del EPS encarceló a cuatro oficiales sandinistas que habían donado armas (sin ánimo de lucro) y a once salvadoreños. Por otra parte, en un comunicado del 1 de enero de 1991, el EPS acusaba a Joaquín Villalobos, dirigente del FMLN, de haber organizado el desvío de los misiles.

El 4 de enero, una nueva declaración añadía, de manera igualmente inaceptable, que "este pequeño grupo de oficiales, cegado por sus pasiones políticas y guiado por argumentos extremistas, atentaron contra el honor militar y contra la lealtad a la Institución y al mando militar; lo que equivale a atentar contra los intereses sagrados, patrióticos y revolucionarios de Nicaragua". La crisis de los misiles supuso un golpe que descorazonó a muchos militantes sandinistas, que tienen en lo más alto de su escala de valores el deber de la solidaridad internacionalista. La Juventud Sandinista y el FNT han denunciado la actitud del EPS (y la de la dirección del FSLN que le apoyaba).

La decisión del EPS de condenar a los militares internacionalistas profundizó la crisis abierta en sus filas tras la destitución, en agosto de 1990, del coronel Pichardo, jefe de la aviación y responable también de una ayuda, juzgada intempestiva, al FMLN. Y, sin embargo, la época en que el EPS se planteaba como un deber ayudar al pueblo salvadoreño no está tan lejana... ¿Perderá ese espíritu el ejército sandinista, a fuerza de "realpolitik"

Debilidad y vitalidad del FSLN

El anclaje revolucionario del FSLN sigue vivo, pero ha sido fuertemente cuestionado por algunos de los líderes que dirigieron la política de austeridad aplicada por los sandinistas a partir de 1988, política basada en la búsqueda de un consenso con la burguesía a espaldas de los intereses de los sectores populares. Estos dirigentes practican un discurso reformista moderado que no tiene en cuenta la miseria de los nicaragüenses, que sufren un capitalismo que no tiene nada de moderado. Algunos, incluso, se han convertido en los apóstoles de un co-gobierno con la UNO o, en todo caso, con sus sectores más moderados.

Los militantes que defienden el anclaje revolucionario del Frente pueden apoyarse en la importante movilización social que dirigen. Pero, aparentemente, no dan prueba de tanta coherencia y tanto espíritu ofensivo como aquellos que defienden una línea moderada.

En ese sector moderado se encuentran, particularmente, el exministro sandinista Alejandro Martínez Cuenca; Edmundo Jarquín (vicepresidente del grupo parlamentario sandiñista); Rafael Solís (ex-secretario de la Asamblea Nacional); Herty Lewites (ex-ministro de Turismo); apoyados todos ellos por Sergio Ramirez (ex-vicepresidente de la República y actual presidente del grupo parlamentario, cercano a Humberto Ortega y al comandante Victor Tirado, dos ex-terceristas). Todos ellos desarrollan una política que está en contradicción flagrante tanto con el programa histórico del FSLN de 1969, (al que consideran caduco) como con la declaración de El Crucero, adoptada por la Asamblea sandinista en junio de 1990, después de la derrota electoral. Durante varios meses, sus posiciones no han sido desautorizadas ni por la dirección del Frente como tal ni por ninguno de sus miembros. Esta situación es inquietante y provoca repetidas críticas de muchos militantes, que lamentan la ausencia de posiciones claras por parte de la dirección.

La radical declaración hecha por Daniel Ortega en nombre de la dirección, el pasado 10 de abril, parece indicar una inflexión a la izquierda. Pero, se trata en realidad de un giro decisivo o sólo intenta presionar al gobierno y frenar el descontento de la base y de nuchos cuadros de cara al congreso de julio.

El carácter público, crítico y polémico del debate que se desarrolla en el FSLN al acercarse su primer congreso, atestigua la vitalidad de un partido que dirigió una autentica revolución popular, que ejerció el poder en condiciones de gran adversidad y fue puesto a prueba por la derrota electoral de febrero de 1990.

El déficit democrático

El FSLN pago duramente la insuficiencia de debates internos democráticos durante 11 años de ejercicio del poder. El verticalismo, resumido en la consigna "¡Dirección Nacional, ordene!", cimentó las relaciones entre ésta y la Asamblea Sandinista (120 miembros, reforzados por las incorporaciones de la reunión de El Crucero), las direcciones de las organizaciones sandinistas de masas, la dirección de la organización juvenil, y las estructuras intermedias y de base. Este verticalismo ha sido justificado, sin razón alguna, en virtud del estado de guerra.

Otro elemento viciado de funcionamiento es el lazo intimo entre el Estado y el partido. Finalmente, la incapacidad o la negativa para adoptar una plataforma marxista clara y dar una formación en este sentido a sus cuadros y a sus militantes también ha pesado negativamente (aunque, en realidad, quienes se reclaman del marxismo no son legión en el FSLN).

Todo esto impidió al Frente evitar o corregir a tiempo los graves errores cometidos durante los años en que ejerció el poder: la mala comprensión de la cuestión campesina; los errores frente a las minorías indígenas de la costa atlántica; los lazos con las organizaciones

11. *Todas las citas están tomadas del artículo de Gioconda Belli publicado en la edición del 14 de febrero de Barricada.*

12. *El Proyecto de Estatutos del FSLN, sometido a la discusión de los militantes con miras al congreso, confirma la posibilidad de ser miembro del Frente cualquiera que sea la pertenencia de clase: "Arto. 4. Son miembros del FSLN todos los ciudadanos nicaragüenses -sin distingo de credo religioso o condición económica- que acepten su plataforma programática y sus estatutos" (Barricada internacional, abril de 1991). Esta disposición fue inmediatamente criticada en la prensa por varios militantes.*

13. *Ventana, número 453, 15 de enero de 1991.*

14. *Herty Lewites, antiguo ministro sandinista de Turismo, es uno de esos millonarios. En 1988-1988 puso en marcha un progama de privatización de una parte de la infraestructura turística. Recientemente declaró: "... cuando nosotros perdimos (las elecciones), yo me sentí como golpeado. Entonces yo dije: voy a demostrar que yo soy un sandinista que me puedo hacer millonario. Porque el reto ahora es, sin estar en el gobierno, llegar a hacer dinero, esa es un bonito reto como militante del Frente Sandinista. Ahora, indiscutiblemente, el Frente no ha definido, partiendo de su Dirección Nacional, qué es lo que en realidad está buscando. (...) Yo lo que le pido al Frente Sandinista es lo siguiente: zapatero a tus zapatos. Si yo llego a a nivel personal no me voy a sentir mal. "El Semanario, 7 de marzo de 1991.*

15. *Ver Inprecor francés, números 313 y 314, correspondientes al 13 de julio y al 14 de septiembre de 1990.*

16. *Nicaragua en concertación, publicación oficial del gobierno nicaragüense, Managua 1990.*

de masas, a menudo concebidas como meras correas de transmisión; la incapacidad y la negativa para desarrollar el control obrero y popular, al tiempo que daba demasiado peso a tecnócratas y administradores; el exagerado desarrollo del aparato militar y sus privilegios materiales; las medidas tipo Fondo Monetario Internacional (FMI) aplicadas a partir de 1985 y, sobre todo, de 1988, y las desigualdades sociales y la recesión que las mismas acentuaron; el hecho de que lo fundamental del modelo democrático se fue limitando progresivamente a su versión burguesa (Asamblea Nacional; poder presidencial; no revocabilidad de los electos; supresión del Consejo de Estado, donde estaban representadas las organizaciones de masas); el retraso respecto a los problemas de la religión y la iglesia (cuando al principio el Frente tenía una aguda comprensión de la cuestión); y el triunfalismo de la campaña electoral de 1990.

¿Frente o partido?

Participando en el debate público, Gioconda Belli, escritora y militante sandinista, se preguntaba si el FSLN era un frente, o un partido o las dos cosas a la vez: "para algunos, el FSLN es o era una organización estructurada alrededor de una ideología de izquierda, con una base marxista; para otros, el FSLN es un partido donde tienen cabida 'todos los nicaragüenses que amen su patria, sin distingo de si son propietarios, cristianos, evangélicos o campesinos pobres'. Ambas posiciones han sido avaladas por la dirección nacional y, sin embargo, ambas representan ópticas muy diferentes que, en la práctica política, deberían conducir a la estructuración de formas organizativas también diferentes; puesto que en una concepción marxista leninista, la comunidad ideológica dentro del partido es una condición sine qua non, sobre la que se basa la posibilidad de estructurar un determinado programa que, históricamente, impulsa la toma del poder por los trabajadores (...). La otra posición, por él contrario, corresponde más a una estructura de frente o de partido electoral; todos pueden cobijarse bajo la bandera del sandinismo y tanto propietarios como asalariados deben esperar que el partido represente sus antagónicos intereses"(11).

Belli se inclina abiertamente por un partido revolucionario capaz de establecer un frente, sobre todo en periodos electorales. Por otra parte, señala las nefastas consecuencias derivadas de la confusión entre partido y frente: "la 'disciplina partidaria' es una ilusión, precisamente porque al no existir la comunidad ideológica como base consciente de la disciplina, ésta no se entiende de la misma manera por todos y cada cual la interpreta a su manera. (...) la apelación a la disciplina (...) se convierte en una simple palanca de poder, un mecanismo represivo que en la 'línea del partido' pasa a ser un dogma que se acata por temor y no por convicción y en vez de ser una 'línea' a ser enriquecida, deviene en una camisa de fuerza..."

Expone también los efectos resentidos en materia de formación: "esta problemática de la doble estructura de frente y partido de vanguardia, se expresó (...) en los primeros años 80, cuando (...) la educación partidaria se desideologizó y se convirtió en el mecánico y pobre estudio de la problemática coyuntural, lo que determinó una práctica coyunturalistas (...)."

Muestra a continuación, la contradicción que existe en el hecho de que a partir de 1989, el FSLN adopte un progama esencialmente electoral, dirigiéndose a todos los sectores en edad de votar, sin por ello renunciar a su orientación socialista, según la cual los trabajadores deben ser hegemónicos. Y concluye con un llamamiento a los militantes: "Sin negar lo que de válido y recuperable puede haber, hay que ver también los efectos negativos e ir avanzando hacia una síntesis ya que, en la actualidad, el nivel de heterogeniedad de esta esquizofrenia entre frente y partido, no le permite al FSLN ser un partido que garantice la hegemonía del proyecto social en beneficio de los trabajadores, ni ser un frente amplio que, conservando una línea de profundas transformaciones sociales, pueda a la vez apelar al voto de amplios sectores de la población."

¡De todo hay en el FSLN!

Abordando el mismo tema que Belli. Rosario Murillo, directora de Ventana, suplemento cultural de Barricada, poetisa y antigua compañera de Daniel Ortega, da un acusador tetimonio del estado actual del FSLN: "En él (el Frente) han tenido cabida sandinistas y no sandinistas. Millonarios y paupérrimos(12). Almas de dios y almas del diablo. (...) Sí, señores, el Frente Sandinista es, actualemte, un Frente y como Frente, donde alcanza de todo, es, en estos momentos, un montón de mierda"(13). Murillo señala la necesidad del proyecto y de la práctica revolucionarias: "Ser revolucionaria, roja, comunista, compañera, camarada, aspirar a la revolución en Nicaragua, en el tercer (y en todo el) mundo, es cuestión de alma, vida y corazón."

Ataca luego al ala moderada del Frente, que tomando como pretexto la crisis del llamado campo socialista manda a las calendas griegas la perspectiva revolucionaria: "Hay quienes sienten todo esto como cursilería barata. Y ahi ultramodernos que ahora tran-



hecho. En el curso de la Asamblea Sandinista de El Crucero, realizada en junio de 1990, la Dirección Nacional, frente a las críticas de los militantes comprometidos en las luchas, puso a consideración un texto radical que se reconciliaba con la línea de "gobernar desde abajo". Sin embargo, entre las conquistas revolucionarias inviolables, no se mencionaba ni el sector nacionalizado ni el armamento de las masas.

El compromiso alcanzado con el gobierno en junio de 1990 se vio rápidamente cuestionado por nuevas medidas antisociales. La huelgas de julio significaron un salto cualitativo en el enfrentamiento entre el poder de la UNO y los sindicatos sandinistas. El FSLN se puso entonces del lado de los huelgistas, al tiempo que recomendaba la conciliación. Se llegó, así, a un nuevo compromiso. Pero unas semanas más tarde el gobierno mostró que no estaba dispuesto a poner en práctica los acuerdos, y las privatizaciones se pusieron en marcha. En septiembre, en un clima social nuevamente degradado, el gobierno inició conversaciones con el fin de llegar a un pacto social. Este fue firmado el 26 de octubre con los sindicatos sandinistas, los sindicatos pro-UNO, y unas cuantas federaciones patronales, con exclusión de la principal, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

sitan por el chic anti-radical. Por el centro, dicen. Para llegar más rápido... Se puede saber, adónde...? El mundo, es cierto, ha cambiado. Los soviéticos reniegan de sus propias mentiras o verdades; ya no quieren llamarse soviéticos, ni socialista, ni Rojos. Pero la revolución no es la extensión en el mundo del modelo soviético, y eso lo entendió muy bien Nicaragua y el sandinismo (...) Se acabó el comunismo en los países del Este...? qué bien! Pero, acaso alguna vez Nicaragua estuvo en el Este...? Acaso hubo alguna vez comunismo...?".

A continuación, describe con más precisión a los que denuncia: "Hemos hablado del Frente Sandinista y de su amplitud, que algunos llaman diversidad ideológica. En él los millonarios aspiran a hacer millones, para ayudar dicen, (como patrones, evidentemente) a los demás(14). En él también hay políticos electoreros, que aspiran a la politiquería de maquillaje pretendiendo con viejos métodos -que ahora llaman modernos- engañar a los demás."

Finalmente concluye su dura sátira con la referencia al Congreso: "Y los que somos del Frente tendremos que definir este año, si éste va a ser Frente de sandinistas o de revomcionistas: de pragmancos o de parásitos; de camaleones-matamamas o de verdades; de millonarios o de trabajadores (...) Quién puede asegurar este Frente Sandinista...? lógicamente que sólo aquellos que vengan de, o hayan optado por, el pragmatismo de la sobrevivencia física y de la dignidad humana, el de la cruda y desnuda realidad, que es también, paradójicamente, el de las esperanzas y los sueños. De allí que nuestras expectativas revolucionarias para el Congreso estén cifradas en que los derechos de las mayorías empobrecidas estén plenamente representados, por ellos mismos y por quienes asuman con una sola cara, su defensa."

Pacto social y concesiones

¿A qué práctica del FSLN responde la voluntad, más arriba expresada, de ver al sandinismo adoptar un perfil y una práctica de clase netos? Para verlo, volvamos sobre los conflictos sociales que estallaron cuando la UNO accedió al poder(15).

Los trabajadores de la ciudad y el campo, organizados en la FNT, intentaron contener los ataques gubernamentales a través de varias huelgas. Los movimientos de mayo y junio de 1990, sacudieron a la dirección sandinista y el acuerdo que les puso fin fue negociado, en parte, bajo la mesa. Los representantes de los asalariados no participaron en todas las discusiones. Trinchera, el semanario de los sindicatos sandinistas, criticó fuertemente este

Las privatizaciones

Estos acuerdos, explícitamente destinados a dar confianza al FMI, al Banco Mundial, a algunos gobiernos europeos y, sobre todo, a los Estados Unidos, sancionaron una concesión central por parte sandinista: "El Gobierno, al privatizar empresas del Estado, tomará en cuenta los derechos adquiridos de los trabajadores, así como el derecho a participar en la propiedad de las mismas, (...) podrá autorizar el funcionamiento de Instituciones Financieras Privadas (...); autorizará licencias de exportación a Asociaciones de Productores y particulares"(16).

De esa manera se ponían en entredicho tres importantes conquistas de la revolución: la existencia del Area Propiedad del Pueblo, la nacionalización del sistema financiero y crediticio, y el monopolio del Estado sobre el comercio exterior.

Estas concesiones de los sandinistas fueron objeto de fuertes críticas por parte de un sector de izquierda del Frente: "No obstante que el Frente Nacional de los Trabajadores (...) haya firmado los Acuerdos de concertación, hay evidencias de que las bases de los trabajadores y sectores populares no están de acuerdo con el punto de las privatizaciones. (...) ese gesto de conciliación implica una concesión en aspectos de principios y de concepciones

fundamentales de la revolución. (...)

Por supuesto que el derrumbe del modelo socioeconómico de los países del Este europeo representa para algunos una desventaja para reivindicar lo progresivo de la propiedad social, colectiva, sobre los medios de producción -y para otros, una magnífica ocasión para deshacerse de un concepto con el que nunca estuvieron plenamente identificados. Pero no fue el concepto lo invalidado en esos países, sino la forma adoptada y en todo caso nadie puede negar que en nuestras condiciones el APP representan un eje potencial de desarrollo socioeconómico del país"(17).

Los autores del texto formulan enseguida una reflexión crítica sobre la política de los sandinistas en el poder: "Quizás sean errores cometidos alrededor de las formas de gestión y tipo de relaciones que impulsó el gobierno sandinista en torno a las empresas del APP y que limitaron en el trabajador su identificación como propietario social de las empresas, lo que ahora está facilitando que renuncien con facilidad a su preservación."

Finalmente, señalan las consecuencias que la aceptación de las privatizaciones traerá para el programa del FSLN: "En última instancia cabe preguntar: ¿Cuál es la posición del FSLN sobre la propiedad social? Hasta hace poco la respuesta estaba implícita en la idea de preservar el APP. Ahora los hechos señalan otra dirección. Discutirlo en el Congreso quizás sea demasiado tarde, más aún, en los hechos ya se habrá impuesto la inversión conceptual que supone sustituir la reivindicación, de los trabajadores y de todo el pueblo, de la propiedad social sobre los medios de producción -cuya forma embrionaria es el APP- por la reivindicación de la propiedad privada."

Cualquiera que sea la posición que el congreso del FSLN adopte, lo que sí es seguro es que los trabajadores y el FNT (apoyados por el FSLN) van a intentar limitar los daños demandando que algunas privatizaciones se hagan a su favor(18). Pero, amén del hecho de que en la mayor parte de los casos no han ganado el pleito, lo cierto es que la propiedad privada de los trabajadores de toda o de una parte de la empresa no va a resolver nada. Si el APP es desmantelado y la recesión se mantiene, los colectivos de trabajadores deberán administrar la empresas en un ambiente totalmente hostil, y deberán efectuar despidos e, incluso, el cierre de las mismas.

Se oye hablar de "co-gobierno"...

Aunque firmados en aras de la paz social, los acuerdos de octubre de 1990 fueron seguidos de dos ofensivas de la derecha: "la rebelión de los alcaldes", en noviembre, y la del grupo parlamentario de la UNO, en diciembre(19). Los sandinistas debieron hacer nuevas concesiones respecto al ejército.

Esto no impidió al grupo parlamentario sandinista unirse a una parte del grupo parlamentario de la UNO para elegir a Alfredo César presidente de la Asamblea nacional -unos días más tarde, este ex-jefe de la contra, allegado a Violeta Chamorro, se unió al ala ultra de la UNO en contra del compromiso alcanzado por la dirección del ejército y la presidencia en torno al presupuesto de defensa. César no rompió su alianza con los extremistas hasta que estuvo seguro de ser electo gracias al apoyo de los sandinistas. Para arrancar una solución de compromiso, los sandinistas aceptaron una reducción adicional del presupuesto militar, que fue finalmente adoptado por 69 votos a favor (36 diputados del FSLN y 33 del grupo César de la UNO) y 21 en contra (del sector del vicepresidente Godoy). Unos días más tarde, César era elegido. De esa manera la presidencia de la Asamblea quedó constituida por cuatro miembros de la UNO, cercanos a César, y dos del FSLN.

Esta táctica parlamentaria estimuló, con gran perjuicio para la base militante sandinista, la tesis del co-gobierno sostenida por el ala moderada del Frente, Rafael Solís, uno de sus portavoces, escribió respecto a la actitud del FSLN durante la rebelión de los alcaldes: "Por primera vez el FSLN jugó una política inteligente y no se confrontó directamente con los rebeldes, respaldando más bien -aunque discretamente- al gobierno, lo que contribuyó a la solución pacífica del problema y a la vez ha contribuido aún más a forjar este 'co-gobierno' a que nos referíamos anteriormente. El 'co-gobierno', a mi juicio, no tiene porqué ser malo, ni tiene porqué ser rechazado por los sandinistas"(20).

Solís opone esta actitud "constructiva" a la adoptada anteriormente: "El FSLN aprovechándose de errores cometidos por el gobierno y ante la presión (...) se embarcó en la asonada de julio (la huelga general), que a mi juicio tuvo repercusiones negativas no sólo para el país, sino para el sandinismo mismo." Para Solís, hay que convencer a los trabajadores de seguir sacrificándose, diciéndoles que los sindicatos sandinistas, la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y la Central Sandinista de los Trabajadores (CST), levantan reivindicaciones exageradas.

Sergio Ramírez, jefe del grupo parlamentario sandinista, es más prudente. En una entrevista concedida a Barricada, el periodista Xavier Reyes Aiba resume así la posición de Ramírez: "Lo que ahora existe entre el Frente Sandinista y el gobierno (...) es un entendimiento político global que tiende a bus-

17. Nicaragua desde adentro, Managua, 30 de diciembre de 1990.

18. "Nuestra propuesta es la privatización en beneficio de los trabajadores: pero otras fuerzas se ponen en movimiento para adueñarse de las propiedades. Esto será decisivo para el FSLN, el futuro revolucionario y la estabilidad del país" (Daniel Ortega en Barricada, 11 de abril de 1991.

19. Ver Inprecor francés, números 326 y 328, correspondientes al 15 de marzo y 12 de abril de 1991.

20. Barricada, 26 de diciembre de 1990.

21. Barricada, 22 de enero de 1991.

22. El Semanario, 7 de marzo de 1991.

23. También tuvo que ver la publicación por parte del Frente de un texto confidencial del Banco Mundial en el que se constataba que "el gobierno está comprometido a la total privatización" (Barricada, 1 de abril de 1991). Este documento indicaba claramente la muy particular naturaleza del Estado dirigido por Chamorro: "Existe preocupación (...) acerca de que, dada la naturaleza de las dificultades políticas actuales y al hecho de que los partidarios del régimen anterior aún controlan las oficinas legales, incluyendo la policía, no será fácil hacer cumplir los derechos de propiedad." Si estos círculos capitalistas tienen razones para inquietarse, no les queda otra que consolarse porque, como dijo Antonio Lacayo, "Se ha repartido un equivalente a la décima parte del territorio de la república de El Salvador a los antiguos dueños que habían sido confiscados" (La Prensa, 4 de febrero de 1991). En su momento, lo que inquietaba a Lacayo era que el nivel de la ayuda estadunidense resultaba inferior y de lejos, a "los que Nicaragua recibía (hasta 1990) del bloque socialista y de la Unión Soviética en particular."

24. Barricada, 11 de abril de 1991

car puntos de encuentro en asuntos que tienen que ver con la estabilidad nacional"(21).

Ramírez reconoce que el apoyo del grupo palamentario sandinista a la candidatura de Alfredo César fué "un asunto obviamente negociado entre el Frente Sandinista y el gobierno".

El Congreso se acerca

Edmundo Jarquín, vicepresidente del grupo parlamentario del FSLN, declaró unos meses más tarde, que había que apoyar, en contra de la opinión del FNT, el plan de choque del gobierno de marzo de 1991, Agregó: "Creo, además, que si nosotros estaríamos (sic) en el gobierno, estaríamos haciendo algo igual o muy parecido en materia de estabilización"(22).

En marzo de 1991, Jarquín y el resto del ala moderada especulaban sobre el éxito del plan económico de la UNO: "Si durante el mes de julio, la situación económica ha mejorado, el debate en el Frente Sandinista va a ser menos complejo.(...) Vamos a estar menos tensionados por posiciones extremas". Fue esta corriente la que empujó al FNT a dar dos meses de respiro al gobierno (el 19 de marzo se firmó un acuerdo en este sentido). Esta ala esperaba que el FMI y el Banco Mundial concedieran finalmente importantes líneas de crédito.

Cinco semanas más tarde el fracaso del plan(23) estaba présente, sin lugar a dudas y para muchos, en el discurso más radical de Daniel Ortega: "La política de ajustes estructurales determinará el futuro del país. O bien se retoma el modelo oligárquico capitalista conocido, imponiendo un neosomocismo, un neocapitalismo, o bien el país sigue avanzando para encontrar nuevas formas de desarrollo económico y social que preserven las conquistas básicas de la revolución. (...) El gobierno está bajo la influencia de la política de Estados Unidos, que se creen con derecho a gobernar Nicaragua a través de este recurso.

Las fuerzas de extrema derecha sienten igualmente que éste es su gobierno, que busca eliminar el sandinismo sin respetar el verdadero juego democrático. (...) Es la contrarevolución buscando ganar terreno. Ya no es la contrarrevolución armada, pero ésta se expresa para que el gobierno avance en el desmantelamiento de la revolución"(24).

El calvario del pueblo

Durante la campaña electoral, la derecha prometió que, de llegar al poder, haría bajar sensiblemente la inflación, relanzaría el empleo y reactivaría la economía, todo en 100 días. Para ello acudió a métodos clásicos tipo Fondo Monetario Internacional (FMI), agravando las medidas de austeridad aplicadas por lossandinistas a partir de 1988.

En 1990 el gasto público se redujo fuertemente, así como el crédito a las empresas. El gobierno intentó, de esa manera, disminuir la masa monetaría en circulación para bajar la inflacción. Las consecuencias fueron nefastas: ahondamiento de la recesión, multiplicación del quiebre de empresas, despido de decenas de miles de trabajadores de los sectores público y privado (30 mil según los sindicatos) y degradación en picada de los sistemas de salud y educación. Por sexto año consecutivo, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó; la inflación, lejos de ser bloqueada y a pesar de la recesión, llegó a cerca de 14.000% en 1990 (contra 1.600% en 1989).

Venturas y desventuras del córdoba-oro

La introducción de una nueva moneda, el córdoba-oro, puesta progresivamente en circulación para ciertas operaciones, era el arma de choque contra la inflación.

De lo que se trataba era de dejar que el viejo córdoba (identificado con el sandinismo) se devaluara al máximo para luego sustituirlo por el córdoba-oro (identificado con el nuevo régimen), moneda que, en función de que contaría con la confianza del público, permitiría detener la inflación -el córdoba-oro debía cambiarse a la par del dólar.

Esta operación también resultó un completo fracaso. Unos meses después de su puesta en circulación, la nueva moneda se cambiaba a cinco por un dólar en el mercado negro.

Por otra parte, el gobierno disminuyó los impuestos a la importación. De esa manera, el mercado nacional se vio invadido por productos de los países vecinos, y se agravó la crisis del sector productivo abasteciendo el mercado interno -en 1990 las importaciones de bienes de consumo aumentaron 74%, mientras que los bienes de producción bajaron 25%-, sin mejorar el poder de compra de la inmensa mayoría de la población. Por el contrario, Nicaragua se ha convertido en el país más caro de América Central(1).

Para medir la magnitud de la recesión basta citar unas cuantas cifras: en 1990, la producción industrial bajó 8,4%; la construcción, 36%; la agricultura destinada al mercado interno se ha caido, literalmente, de narices (baja de 40% para el maiz, de 74 y 30% para las dos variedades de arroz, y de 12% para el frijol).

El ministro responsable del plan de los 100 días, Francisco Mayorga, dimitió en el otoño de 1990. El fracaso de su plan (como el del plan de austeridad de 1988) procedía, sobre todo, de un error de diagnóstico: la hiperinflación no se debe, en primer lugar, a un exceso de liquidez o de demanda solvente (y esto, contrariamente a los dogmas del FMI, según los cuales la gente dispone de un poder de compra excesivo en relación a la cantidad de mercancias disponibles): entre mayo y diciembre de 1990, la masa real de los medios de pago en circulación disminuyó 60%: hubo, pues una formidable contracción de la demanda, lo que no impidió que la inflacción acumulada llegara a 5.900% durante el mismo periodo, según un artículo de Pedro A, Rodríguez aparecido en El Nuevo Diario. La sucesión de devoluciones y el ritmo de la inercia de la inflación obligan a los comerciantes y a los productores a integrar la previsión de las devalucaciones posteriores a sus precios de venta; es decir, prefieren vender menos productos a un precio superior que vender más productos con pérdidas o con un bajo rendimiento.

Cuba

Vísperas del IV congreso del PCC

Janette Habel

Las dificultades económicas y las tensiones sociales crecen en Cuba. Las dudas, las inquietudes, las incertidumbres sobre el futuro se han expresado en las asambleas de preparación del IV Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), que debía celebrarse durante el primer semestre de 1991 y que fue atrasado por la guerra del Golfo, la celebración del congreso constituye un dilema para la dirección, que debe responder a las expectativas suscitadas y, sobre todo, tranqulizar a quienes se preguntan si el país puede sobrevivir y cómo. La dirección del PCC está obligada a responder a la impaciencia creciente que se manifiesta entre la juventud y la intelectualidad.

Convocado bajo el signo de la proclamación de Maceo rechazando la claudicación del Pacto del Zanjón (1), el IV Congreso se inscribe en la tradición de las guerras de independencia, de las luchas por la dignidad y la soberanía nacionales: "Por la defensa de los principios revolucionarios, patrióticos e internacionalistas sin dogmas ni esquemas extraños"(2), en el momento en que los imperialistas "creen asistir a una crisis definitiva e irreversible del socialismo"(3).

Ante el hundimiento de lo que aún recientemente se llamaba en Cuba el "campo socialista", Fidel Castro organiza la vuelta a las fuentes -profundamente nacionales- de la revolución. Pero este llamamiento a la resistencia, en una situación económica alarmante(4), no puede evitar los debates más fundamentales: históricos -cómo se ha llegado hasta aquí y por qué no se ha analizado antes la situación de los países del Este-, políticos y económicos. Como subrayaba el Granma del 10 de febrero de 1991, el congreso debía tratar prioritariamente "el desarrollo económico y la democratización de la sociedad", incluída la "democratización del Partido", suscitando un "amplio diálogo nacional". En estos términos han debatido las asambleas locales, a menudo muy animadas, y casi siempre mucho más allá de los límites fijados.

Si se sabe poco sobre el desarrollo de algunas asambleas provinciales, se conocen, por el contrario, los debates impulsados en La Habana por intelectuales y profesionales de diferentes sectores: en la universidad, entre los periodistas, escritores y artistas, y por el Instituto del Cine. Lejos de limitarse a preocupaciones sectoriales, estas reuniones abiertas del Partido han reflejado exigencias políticas más generales. En estos medios, relativamente favorecidos -tienen, entre otras, la posibilidad de viajar, privilegio reclamado por la mayoría de los jóvenes-, la ampliación de los derechos políticos está en el centro de las discusiones. Las críticas no excluyen ni a la prensa, ni a las instituciones (incluído el propio Fidel Castro), ni al PCC. Se ha puesto en cuestión el carácter muy formal de los Organos del Poder Popular (OPP) y de la Asamblea nacional; esta última, cuyas direcciones provinciales y la representación nacional son elegidas por sufragio indirecto, está, de hecho, directamente controlada por le PCC. Las instancias de base locales, cuyos delegados son en principio revocables, están reducidas a tareas de gesión municipal.

El problema del partido único no se aborda, en cambio, el monolitismo, la falta de respeto a las diferentes opiniones y la imposibilidad de expresarlas son criticados con dureza; más aún, los problemas de la corrupción, la doble moral y la hipocresía son mencionados constantemente.

Se sañala a la hipercentralización económica como la responsable de las dificultades de la vida cotidiana. Se oyen voces que reclaman la legalización de ciertas actividades privadas;

NOTAS.

1.- Antonio Maceo, general negro, fue uno de los principales dirigentes de las guerras de la independencia contra España a fines del siglo XIX. El 11 de febrero de 1878, se hizo en El Zanjón una reunión entre los españoles y los insurrectos para establecer las condiciones de la paz y poner fin a la guerra. Se trataba, de hecho, de una verdadera capitulación puesto que no se reconocía ni la independiencia ni la liberación de los esclavos. En marzo de 1878, Maceo reunió a 1.500 oficiales y soldados en Baragua contra la paz deshonrosa y a favor de proseguir la lucha.

2.- Informa a la Asamblea del PC en La Habana, AFP, febrero 1991

3.- Llamamiento al Congreso.

4.- Ver Inprecor francés N. 328, 12 de abril de 1991.

5.- Guardian Weekly, 17 marzo 1991.

6.- Ver sobre esto el estudio de Paolo Paranagua. "Carta de Cuba a una Europa infiel. Posición política del cine cubano", en la revista británica Framework de mayo-junio 1991

7.- Próximamente en las ediciones Acte Sud (otoño 1991)

mercados campesinos libres y diversas producciones artesanales que existen clandestinamente y sin ningún control, porque la ineficacia del sector estatal es tal que la vida cotidiana se convierte en un infierno.

Como han subrayado diversas intervenciones en las asambleas de debate, encontrar un fontanero para reparar canalizaciones averiadas es una hazaña y se paga a precio de oro. La prohibición oficial no impide ni el enriquecimiento ni la corrupción, sino que pone trabas a cualquier control social y favorece la desviación de recursos a gran escala desde el sector estatal. Ahora bien, es vital hacer más transparente un sistema económico cuya opacidad burocrática favorece, en última instancia, el desarrollo anárquico y especulativo del pequeño comercio y del artesanado, que era precisamente lo que se quería combatir. Puede pensarse que autorizando estas actividades se podría, al menos, controlar su desarrollo y sus precios.



El malestar de la intelectualidad

En ausencia de toda explicación oficial y de un análisis coherente de la crisis de los países del Este, que tendría necesariamente consecuencias sobre el sistema institucional cubano, las interpretaciones van en todos los sentidos.

Intelectuales de los que se pensaba que no harían la sombra de una crítica pública ante extraños (la crítica privada ha existido siempre), expresan hoy su amargura. Es el caso, entre otros, del escritor Lisandro Otero, que fue durante un tiempo presidente de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos (UNEAC) y cuya última novela, El arbol de la vida, fue publicada en México pero no en Cuba: "La revolución es terrorífica, bella, desgarradora. Es el fin de algo y el comienzo de otra cosa. En Cuba, la revolución nos permitió hacer una nación de lo que no era sino una colonia". Pero, ¿sobrevivirá la revolución. Según Otero: "Es muy difícil de decir. Hay numerosos y muy graves problemas. La gente actualmente está muy movida y muy inestable. Algunos se vuelven violentos. Crecen la irritación y la ansiedad. Los burócratas no hacen nada, porque así esperan conservar sus empleos.

Por otra parte, no se ven pintadas, no hay manifestaciones. La gente está nerviosa, pero no ha alcanzado aún un punto de ruptura (...). El partido único no puede funcionar. Antes, en la época de Batista, había catorce partidos. Aquello tampoco funcionaba bien. Tenemos necesidad de algo intermedio. Queremos discusiones, ideas, una nueva dialéctica; no queremos ya este autoritarismo. Tenemos necesidad de estimular la iniciativa personal. El problema con el socialismo es que todo es muy abstracto".

A la pregunta de si se considera enfrentado al régimen, responde: "No me considero un disidente. Creo aún en muchas cosas ligadas a la revolución. No soy víctima ni de hostigamiento ni de coerción. solamente se olvidan de poner tu nombre en la lista. Vivo en una especie de nada social. El vacío. Escribo mis memorias. Pienso que van a crearme bastantes problemas, pero el artista debe hablar en su propio nombre. Hay que tener cerca de sesenta años para hacer algo así!"(5).

Apertura y estereotipos

Los intelectuales están molestos. El caso de Otero, escritor antes ortodoxo, no es un caso aislado. Desde que el Instituto cubano de los artistas y técnicos del cine (ICATC) disfruta de una real autonomía de decisión(6), la alegoría política crítica atraviesa las mejores películas cubanas; la sátira de la burocracia, del discurso oficial y de los resortes del poder aparece en películas como "Segundos papeles", de Orlando Rojas, o "Alicia en el país de las maravillas", de Daniel Días Torres, realizada en colaboración con el gran escritor cubano Jesús Díaz. Alicia está en el pueblo donde se reeduca a los "tronados" (expresión popular que designa a los burócratas que han perdido su puesto, porque la jerarquía del partido así lo ha decidido) y hace allí la experiencia siniestra de los horrores del lugar.

No es sorprendente que una de las más largas asambleas generales de preparación del IV Congreso (duró tres días) tuviera lugar en el ICAIC, en presencia de la inmensa mayoría del personal -militantes o no del PCC, es decir, de varios centenares de personas-. Los cineastas cubanos tienen una larga tradición crítica; sufrieron la intolerancia y las concepciones inspiradas en el realismo socialista que impregnaron el decenio negro, de 1975 a 1985, durante la cual películas como "Techo de Vidrio", de Sergio Giral, o novelas como "Las iniciales de la tierra", de Jesús Díaz(7), fueron puestas en el índice durante varios años. Pero hay que subayar que en este terreno, como en otros, la represión no fue comparable a la que reinó en Europa del Este. Estos artistas son también conscientes de que el nacimiento de un cine atóctono, internacionalmente reconocido, está ligado a la revolución; el cine del exilio no ha dado prácticamente nada.

Sin embargo, la apertura actual de la que disfrutan los artistas y los intelectuales -en particular en el terreno de las ciencias humanas, como muestran las investigaciones críticas que reflejan revistas como Cuadernos de Nuestra América o Casa de las Américas- sigue borrada de la prensa política ligada al PCC. El periódico oficial Granma, cuando se encuentra (lo que es difícil con las actuales restricciones de papel), si-

gue siendo un bastión del teque-teque (consignas estereotipadas) e incluso una revista como Bohemia sigue siendo muy pobre. Evidentemente, el control es bastante más estricto en el terreno más directamente político de la prensa diaria o semanal. Castro había denunciado hace algunos años el "síndrome del misterio" que sufrían los periodistas cubanos; ahora bien, si este síndrome no ha desaparecido la responsabilida es del monolitismo impuesto por el partido único, que impide cualquier debate público, y no de los periodistas.

Una juventud rebelde

La juventud es otro sector sensible. El aparato paga hoy el precio de una importante contradicción: las generaciones nacidas tras la victoria revolucionaria han disfrutado de una educación de masas -decenas de miles de jóvenes van a la universidad-, la elevación del nivel cultural es impresionante. La juventud cubana tiene el nivel de formación más elevado de América Latina, pero al mismo tiempo se enfrenta a una sociedad bloqueada. Sus aspiraciones se enfrentan a la rigidez institucional, a los prejuicios machistas aún muy vivos, a los bloqueos culturales... La promoción social, factor importante de la generación anterior, es más difícil con la crisis. Esto provoca la marginación de ciertos sectores de la juventud y su apoliticismo.

Según el anuario estadístico de Cuba, el suicidio ocupa el sexto lugar entre las causas de mortalidad: las más vulnerables son las jóvenes precozmente embarazadas y cuyas familias llevan mal esta situación(8).

Son también muy inquietantes incidentes como el recogido en L'Humanité, diario del PCF, según el cual la policía intervino un concierto de rock en la Casa de la Cultura del distrito de Playa, en La Habana: "Muchos vaqueros y gritos desgarrados. Pelos largos y algunos pendientes, también adolescentes normales, fans del rock. Varios grupos cubanos participaban en el concierto: Horus, Red, Metal Oscuro. La Casa de la Cultura organiza regularmente estos conciertos y presta sus locales a los grupos para que puedan ensayar, sin problemas particulares. Varios centenares de jóvenes asistían al concierto cuando la polícia intervino desalojando el local"(9).

La juventud contra el inmovilismo

Según la versión oficial, la policía intervino para poner fin a una pelea; la corresponsal de L'Humanité, poco sospechosa de animosidad política, señala diferentes versiones y que oyeron frases hostiles al gobierno y, por primera vez, se habrían lanzado piedras contra la policía. Las anteriores intervenciones policiales, motivadas en general por el alcohol, nunca tuvieron tal amplitud; aunque se detecten tensiones entre jóvenes policías venidos del campo y una juventud urbana que, fenómeno casi planetario, adopta un atuendo muy americanizado, que gusta muy poco a una dirección cuyo antiimperialismo radical se ha extendido a la crítica del conjunto del "American way of life".

Roberto Robaina, secretario de la Juventud Comunista, confirma que la juventud cubana se rebela contra cualquier estereotipo, incluidos los revolucionarios: "La generación actual no piensa sólo en divertirse", sino que debe "buscar la forma de ser capaz de jugar el papel de generación continuadora, en el periodo actual, de la obra



8.- Granma, 17 febrero 1991.
9.- L'Humanité 26 abril 1991.
10.- Inprecor 328, 12 abril de 1991.

revolucionaria". Esa juventud no es homogénea "y me molesto cuando alguien encuentra que es malo ser crítico, pues creo que traduce una falta de confianza hacia los jóvenes de hoy, a los que enseguida se acusa de inmadurez".

Hay un desfase, una distancia entre generaciones cuya radicalización se ha hecho en un contexto histórico totalmente opuesto: para la generación castrista, el apogeo de las luchas de liberación nacional y la victoria sobre el neocolonialismo; para las nuevas generaciones, el derrumbamiento del campo llamado "socialista" y la puesta en cuestión de los valores de los que decía ser portador. La dirección del PCC corre el riesgo de pagar caro la ausencia de pluralismo, y el monolitismo y la esclerosis de instituciones y organizaciones que resultan de ello. A falta de mecanismos de debates, de estructuras de intercambio y de discusión, los jóvenes pueden terminar cultivando el cinismo y despolitizándose. Riesgo aún mayor cuando el periódico de la JCC, "Juventud Rebelde", que había conseguido realizar una cierta apertura, frenó considerablemente su aparición a causa de la escasez de papel proviniente de la URRS.

Lo mismo ocurre con al Federación de Mujeres Cubanas (FMC), dirigida por Vilma Espín, quién, a pesar de su pasado heroico en Sierra Maestra, sólo recientemente fue elegida miembro de un buró político hasta entonces enteramente masculino. La FMC está muy cuestionada, sobre todo por su actitud poco ofensiva con el machismo ambiental; retomó con evidente retraso la radicalización feminista y los problemas de las jóvenes adolescentes, en un contexto de cambio radical y explosivo de las costumbres sexuales. En este terreno también el foso entre generaciones es enorme; lo mismo ocurre con la homosexualidad, hoy tolerada.

Fidel y el culto de lo homogeneo

La sociedad cubana ha sufrido en treinta años una mutación colosal: su población casi se ha doblado, está urbanizada (un 70% vive en las ciudades, el 20% en La Habana); en un país que tenía un 25% de analfabetismo en 1959, los libros se arrancan de las manos. En estas condiciones es una aberración querer seguir imponiendo estructuras fijas, importadas de la URSS, no respetar la diversidad de corrientes de opinión, las manifestaciones críticas de la juventud, los fenómenos culturales nuevos por heréticos que sean. Toda la concepción de partido único/ partido de Estado (no exento de corrupción, además) está en cuestión, en un contexto en el que las verdades absolutas ya no son de recibo y cuando las contradicciones entre las palabras y los actos -la doble moral- es cada vez más perceptible. Pero la dirección del país -que reacciona de forma diferente, según se trate de sectores del aparato o del núcleo fidelista- parece paralizada por el inmobilismo, lo que sin duda explica el retraso del IV Congreso. Sin embargo los acontecimientos se aceleran bajo la presión del exterior y de la misma población, no se podrán retrasar indefinidamente los cambios necesarios si se quieren evitar conmociones más graves.

La opinión general (incluido el sector más lúcido del exilio) es que ninguno de los grupos disidentes es verdaderamente representativo. Dependientes a menudo de los grupos más reaccionarios de Miami, no representan por ahora una amenaza real para el régimen. Los críticos más ofensivos gravitan dentro del PCC o en su alrededor, lo que debería favorecer la expresión del pluralismo en la revolución sobre los dos grandes problemas del momento: la política económica y la democratización institucional. Sobre ambos hay ya al menos dos respuestas: la de Fidel y la de los burócratas, cuya primer interés es salvar sus privilegios.

Dada la difícil situación que atraviesa el país, cuando el acuerdo con la URSS firmado tras un duro proceso(10) no se respeta totalmente, el dirigente cubano, pragmático y empírico, está dispuesto a aceptar concesiones importantes en términos de privatización. Castro no tiene sólo una contradicción. Su denuncia de los "mecanismos capitalistas" no concierne a los acuerdos con los trust extranjeros; las empresas mixtas se extienden, con consecuencias en materia de desregulación del trabajo y desigualdades, contradicción explosiva en última instancia. Condena, por el contrario, el enriquecimiento de los artesanos y campesinos, sin señalar que esas actividades privadas podrían suponer una mejora de la vida cotidiana y una suavización de las tensiones sociales.

El proceso de "rectificación" ha sido abordado de todas las formas posibles, no queda gran cosa del proyecto inicial. Fuera del control del dirigente cubano se tomaron una serie de iniciativas económicas; el monopolio de los discursos es una cosa y la práctica otra -"siempre está hablando" dicen en privado algunos tecnócratas-. Realmente no se han propuesto políticas económicas alternativas.

Por el contrario, en el terreno político pasa algo distinto. La concepción fidelista de la desburocratización tiene varias consecuencias: de una parte, es una desburocratización por arriba, autoritaria, sin control real de las masas y por tanto frágil; por otra parte, desestabiliza profundamente al aparato que esquiva el golpe y se protege -a menudo eficazmente- de las ofensivas del dirigente cubano, que no toma las medidas que permitirían llevar a cabo una lucha eficaz contra el cáncer burocrático que roe al país. La prueba de ello es la suerte que han corrido las medidas de restricción de puestos, en contra del número excesivo de burócratas, tomadas en el marco de la preparación del congreso y el eficaz reciclage de cierto número de ellos (se han adoptado ya medidas de reducción de un 50% de puestos). Igualmente, el cambio en la modalidad de elección de los responsables del PCC -elección directa y secreta- ha tenido consecuencias en la base, localmente, pero parece que lograron poco impacto provincial o nacionalmente. Además, la relación de fuerzas establecida en el terreno local sigue siendo en gran medida formal, dado que la elección no se hace en base a una plataforma ni a un mandato. Los delegados de base, a menudo nuevos, incluso cuando han sido elegidos democráticamente no han tenido mucha influencia en las asambleas provinciales del Partido.Como prueba la forma de tratar los debates políticos, a pesar de las declaraciones iniciales.

El primero de julio de 1990, Granma reproducía una larga nota del buró político: "el Partido Comnista es favorable a un amplio debate nacional (...) La defensa del socialismo no puede ir pareja con una posición cerrada o de resistencia. Si hablamos de rectificación, no podemos defender a ultranza nuestros métodos actuales". El llamamiento al debate debería permitir "un funcionamiento más democrático de las instituciones políticas y del Estado". La nota subrayaba que "la calidad de la reunión no podrá medirse en ningún caso 'como hacíamos en el pasado' por el nivel de unanimidad o la ausencia de cuestiones consideradas problemáticas o divergentes. No deberemos quejarnos si puntos de vista hasta ahora reprimidos o inhibidos, se manifiestan hoy públicamente, porque nos ofrecen la posibilidad de discutir, de aportar elementos nuevos y evitar la confusión y los errores".

El PCC y el debate

Ocho meses después, en febrero de 1991, el informe a la asamblea del Partido en La Habana sintetiza lo ocurrido en el resto de asambleas. Redactado tras la celebración de 11.337 reuniones de base, para registrar las opiniones de aproximadamente un millón de personas, el informe subraya que una persona de cada quince "ha dado su opinión abiertamente"; han aparecido ciertas "propuestas neoliberales y capitalistas", consideradas por el documento como "cuantitativamente sin importancia", hechas por "ingenuidad política, por confusión o inspiradas por posiciones abiertamente opuestas a la política del partido". Según el informe, algunos "se

han pronunciado por la privatización de la producción y de los servicios, por la instauración de una economía de mercado, por el restablecimiento de los mercados libres campesinos y, en casos muy limitados, por el pluripartidismo".

En algunos casos hubo, "una falta de combatividad o una cierta ingenuidad" por parte de los comunistas y revolucionarios y "tuvo que procederse a análisis en los organismos de base del Partido, para clarificar la esencia de estas propuestas (...) De forma general las explicaciones dadas han sido comprendidas; sin embargo, fue necesario aplicar medidas disciplinarias a militantes y hacer críticas a células que no fueron capaces de defender la política del Partido". En esas condiciones el amplio debate nacional puede perderse y el IV Congreso reafirmar una línea que se resuma en hacer, como se dice en Cuba, "más de lo mismo".

El informe termina en cuatro negaciones: no a la privatización, no a la economía de mercado, no al pluripartidismo, no a las reformas capitalistas "entreguistas".

Castro no da ninguna impresión de ir por el único camino que permitiría poner en cuestión los desaguisados de la burocracia: la denuncia de sus privilegios, de su cinismo y de su corrupción. Para ello tendría que darse un poder de control real a las masas populares (inexsistente en las OPP vaciadas de su sustancia, como reconoce una encuesta oficial y pública), medida ligada a la puesta en cuestión del partido único... y del modo de dirección paternalista instaurado por el castrismo. Ahora bien, esta concepción es cada vez más contestada, incluso si se piensa que no es por puro interés en su propio poder que el comandante en jefe la defiende, sino en nombre de una concepción ideológica de conjunto, mezcla de militarismo, de defensa de la revolución asimilada al monolitismo y de incompresión de la diversidad social, política y cultural de un país como Cuba. Ese culto de lo homogéneo es lo que está ligado a la defensa del partido único.

Entre la espada y la pared

Es cierto que algunos dirigentes latinoamericanos ponen en cuestión esta visión -por ejemplo: Fernandez Huidobro, dirigente de los Tupamaros-, para ellos, "Fidel es el líder de la oposición y muy a menudo un líder en minoría"(11). Huidobro pone el dedo en la llaga: para él, Fidel combate "contra algo que no se puede agarrar, que está por debajo de él, pero por encima del pueblo y que parece invulnerable. Algo grueso, espe-



11.- Mate Amargo, 13 marzo 1991
12.- Inprecor n.295 del 16 octubre 1989 (ed. fr.)
13.- Jacobo Timerman, El País, 16 diciembre 1991.
14.- Antiguo policía de Batista, encarcelado durante mucho tiempo en Cuba, que simuló una parálisis en la prisión. Fue liberado por la intervención de Mitterrand, por intermedio de Regis Debray. Es responsable de la delegación norteamericana en la Comisión de los derechos humanos en Ginebra.
15.- La Plataforma democrática incluye a demócratas cristianos, liberales, socialdemócratas y conservadores, apoyados todos por sus correspondientes internacionales.
16.- Cambio 16, Madrid. Entrevista reproducida en Courrier International, 18 abril 1991.

so, viscoso, grosero". Pero, ¿porqué tras 30 años, esta burocracia, pues de eso se trata, es invulnerable?.
Las críticas cada vez más numerosas contra Fidel Castro, a veces incluso públicas -lo que es nuevo-, no son todas inocentes. Aquí también el infierno está empedrado de buenas intenciones. Profundamente inquietos por su suerte desde el asunto Ochoa(12) -traumatismo importante en la historia de la isla-, algunos burócratas empiezan a pensar que en la coyuntura actual su suerte podría estar en peligro, si el descontento popular acababa por desencadenar contra ellos la ira de Fidel, cuya popularidad, aún real, permitiría tomarles como chivos expiatorios. Por esa razón, algunos altos funcionarios empiezan a pronunciarse en privado por reformas económicas en el sentido "perestroikista" y por cambios políticos; por una mayor apertura que permitiera relativizar el papel de Fidel y aumentar el suyo. Esta orientación, que no hace mucho carecía de credibilidad hoy si la tiene, dado el cambio de planteamiento en curso en la comunidad cubana exiliada en Miami.

La emigración cubana representa una potencia económica y política en Florida; un millón y medio de cubanoamericanos viven en Miami. Hasta épocas recientes el objetivo de la "vieja guardia en el exilio" era provocar una invasión de la isla por los marines o lograr, con la ayuda de la CIA, el asesinato tantas veces fracasado de Fidel Castro. Esas sectas de extrema derecha no dudaron en organizar represalias, atentados y asesinatos contra los que llaman "dialogueros", los partidarios del diálogo y de la "reconciliación nacional", que no consideran Miami como su ciudad y que sueñan con volver a "su" isla.

Este sector, antes minoritario, se está haciendo hegemónico por varias razones. De una parte, porque los soviéticos multiplican los contactos para negociar una salida económica y pacífica que aligere el peso que representa Cuba para la URSS; la "guerra fría" ha terminado, la isla ya no les interesa, pero quieren organizar una transición aceptable y pacífica que conserve su imagen en el Tercer Mundo. Por otra parte, la esperanza de un derrocamiento violento de Fidel desde el interior no es de las más probables: como subraya Timerman, en El País, "ya no se cree, en Miami, que la agravación de las condiciones de vida en la isla provoque una rebelión contra Castro"(13).

Los "gusanos" de Miami

Las hipótesis contempladas desde hace dos años no se han confirmado: son poco creíbles ideas como la de un comando suicida o el arresto de Castro por un grupo de militares y su posterior envío a la URSS, en el marco de un complot fomentado por los soviéticos (idea que surgió tras la ejecución de Ochoa en julio de 1989). Enfín, y este es un cambio importante, los viajes y los contactos que se han desarrollado entre familias del exilio y del interior (la mayoría de las familias cubanas tiene un miembro exiliado en Florida) han contribuído a un cambio: muchos cubano-americanos temen una salida violenta a la crisis y los "dialogueros" no son favorables a una intervención americana -la repetición de una guerra del Golfo no les entusiasma-. Pero en una situación de guerra civil: "los Estados Unidos podrían intervenir. Sería desastroso verles dar el poder a un Endara, (el presidente de Panama impuesto tras la expedición americana,ndlr) incluso más delgado, que se llame Valladares."(14).

Una cosa está clara: las premisas para una eventual negociación pasan por el hecho de que esta deberá tener lugar entre cubanos. "La transición hacia la libertad y la democracia debe ser discutida por todos los cubanos. El destino de la nación debe decidirse en Cuba y entre cubanos, no en Moscú ni en Washington", declara la Plataforma democrática cubana, creada en Madrid en agosto de 1990, con el aval del gobierno español. Por primera vez, el gobierno de Felipe González tomó contacto con opositores castristas(15). Cuando el Estado español figura a la cabeza de los interlocutores europeos de Cuba; esta decisión sin duda no es ajena al asunto de las embajadas de julio de 1990. Según la plataforma, las fuerzas políticas que deberían participar en ese diálogo son las siguientes: "Una representación amplia de los grupos, movimientos y partidos que intentan promover cambios políticos y sociales en Cuba; una amplia representación del exilio; una delegación del gobierno cubano; observadores internacionales que den su aval a las negociaciones". Una relación de fuerzas entre corrientes políticas particularmente dosificada.

Para el exilio hay varias salidas: La mejor sería un gobierno de coalición (¡eventualmente presidido por Fidel!), y de la misma forma que Humberto Ortega sigue al frente del ejército en Nicaragua, se podría contemplar que Raul Castro quedara a la cabeza del ejército. Miami tendría un lugar determinante y reforzaría su papel de polo económico, invirtiendo en la construcción de hoteles y de residencias secundarias para cubanos de Florida, que vendrían a pasar a Cuba sus fines de semana, sin contar con la ayuda familiar "que a imagen de los turcos, griegos o portugueses", proporcionarían los cubanos del exilio.

En realidad este planteamiento sólo es para una primera etapa. Viendo que la perspectiva de un derrocamiento armado del régimen desde el exterior era improbable, la comundiad de Miami saca las lecciones de lo que ha pasado en Europa del Este y prepara una transición progresiva y el cambio sin prisas del régimen, que espera minar por sus propias contradicciones.

Es cierto que existen contactos entre La Habana y los dirigentes más moderados del exilio. Pero ¿qué condiciones ha puesto Cuba para la apertura de un diálogo?: el fin del embargo americano, la restitución de la base militar de Guantánamo (más urgente cuando la URSS disminuye por primera vez la entrega de armas). La apertura política es posible -respetando el régimen social cubano- si se dan garantías de que cesarán todas las medidas de hostigamiento y las agresiones. Como dice Carlos Aldana, secretario del comité central y responsable de relaciones internacionales: "Queremos hacer más eficaz el sistema, más democrático, más capaz en el terreno económico. Si se nos dejara tranquilos, si se aceptase a Cuba tal cual es -lo que sería una hermosa expresión de pluralismo mundial, puesto que el pluralismo consiste en aceptar varias formas de gobierno-se vería entonces si nuestro sistema es capaz de autoperfeccionarse en el sentido de una mayor democracia. Empujándonos, hostigándonos, calumniándonos y sometiéndonos a todo tipo de presiones, no se nos puede exigir avanzar en esa dirección más de lo que el sentido común y el instinto de supervivencia nos aconsejen".(16).

Presiones y aislamiento

El pulso se anuncia difícil: los aliados de Cuba en América Central están acorralados, el Estado español y los principales gobiernos latino-americanos apoyan el "diálogo" versión Miami, y ya vemos lo que ocurre con la URSS. La evolución de la situación en Albania y en Corea del Norte, la apertura económica en Vietnam (ante las presiones combinadas de los soviéticos y de Washington), muestran la dificultad de resistir cuando se está de espaldas a la pared; por otra parte, el "modelo" chino -apertura económica y represión tipo Tianamen- no es concebible en Cuba.

El gobierno cubano no puede ignorar los riesgos del engranaje de una negociación cuya contrapartida económica es aleatoria -sabe lo ocurrido con las promesas de ayuda a Panamá y a Nicaragua.

En una situación tan ardua, hay que esperar que la dirección castrista tomará la delantera para no dejarse imponer, en las peores condiciones, una democratización institucional a todas luces necesaria, que yan no dominaría. Es también una condición imperativa para preservar la movilización de las masas, la credibilidad del sistema, en definitiva la revolución que los fidelistas quieren defender a toda costa.

"La lucha de las minas, desde dentro"

Entrevista a Alexandre Sergueev

El 10 de mayo de 1991, tras un conflicto de ocho semanas, los mineros de la Unión Soviética han vuelto al trabajo; sin embargo, los comités de huelga se amntienen y se plantean recomenzar el movimiento si sus reivindicaciones no son satisfechas. Sobre este conflicto reproducimos una entrevista del Imprecor francés con Alexandre Sergueev, miembro del Consejo de coordinación interregional de los comités de huelga, y vicepresidente del buró ejecutivo del Sindicato Independiente Mineros (SIM), fundado por el II Congreso de los mineros celebrado en Donetsk, en octubre de 1990. Es también miembro del comité de huelga de la ciudad de Mezhdurchensk, en el Kouzbass.

¿Cuál es la composición de la población de Mezhdourchensk?.

Es una ciudad industrial de 100.000 habitantes; hay cinco minas y una fábrica que produce materiales de construcción; alrededor de 50.000 personas trabajan en esas dos industrias.

¿Es tan influyente la mafia comercial como en Moscú?

El control de la venta de todos los productos que faltan se efectúa a través del comité de huelga, los comités sindicales y el soviet de la ciudad. Pero, a pesar de ese triple control, sigue siendo la mafia la que controla los intercambios. Hay 5.000 personas trabajando en el comercio: cada una tiene al menos dos parientes y dos o tres amigos; toda esa gente no está evidentemente dispuesta a perder su propio acceso privilegiado a los productos, lo que nos complica mucho las cosas.

Intentamos mejorar la situación, pero, en las condiciones actuales de penuria generalizada, es imposible suprimir todos los abusos.

¿Son mayoritarios en el soviet de la ciudad los miembros de los comités de huelga?

No, sólo el 30% representa a los obreros. Los comunistas son claramente mayoritarios; en parte es debido a que la situación es tan mala que la gente no cree que el soviet pueda resolver sus problemas. Nuestros representantes intentan influir, pero la pesadez de las estructuras hace su tarea muy difícil.

Entre nuestros representantes hay obreros, así como intelectuales -cuando se trata de examinar cuestiones presupuestarias o de resolver problemas económicos, no es sencillo para los trabajadores-.

¿Cómo comenzó la huelga la pasada primavera?.

En octubre de 1990, el II Congreso de los mineros eligió una dirección y le dió tres tareas: organizar localmente sindicatos, concluir una negociación colectiva general en el sector del carbón y organizar congresos de mineros.

Hemos empezado a organizar los sindicatos locales, pero nos hemos visto confrontados a numerosos problemas. Durante años, la principal actividad de los sindicatos soviéticos consistía en distribuir diversas ventajas sociales y productos raros en el mercado; los trabajadores temen que, abandonando la confederación oficial, dejen de disfrtutar del pago de sus bajas de enfermedad, curas de salud, etc.

Sólo quienes comprenden el papel de los sindicatos y que la gente debe organizarse, están dispuestos a unirse a nosotros. Contamos ahora con más de

TEMA 85

R. Lochhead

Debates Ecologistas

[Presentamos dos textos que plantean debates sobre problemas históricos y actuales relacionados con el papel de la ecología en la transformación revolucionaria de la sociedad. El artículo "Por una ecología de la liberación" de Nicholas Hildyard lo hemso tomado de La Bréche, junto con la presentación que hace e él Robert Lochhead. El artículo "Ciencia y poder en la URSS desde Lenin a Stalin" lo hemos tomado de Bandiera Rossa y supone un desarrollo del tipo de problemas tratados ya en nuestras páginas por Jean Batou (ver Inprecor nº81).]

La revista británica The Ecologist es una referencia en el movimiento ecologista de los países anglosajones y su audiencia llega más allá. A la vez revista científica de normas académicas y revista de ideas, se caracteriza por una cierta intransigencia en la propuesta de soluciones radicales a la crisis ecológica, en los terrenos técnicos, económicos, sociales y filosóficos. Bajo el impulso de Edward Goldsmith, ha retomado y ampliado la hipótesis de James Lovelock, formulada por primera vez en 1972 (1).

The Ecologist manifiesta una profunda preocupación por la crisis multiforme en el Tercer Mundo. Le consagra numerosos análisis detallados, en particular gracias a su red de colaboradores y universitarios que viven en los países del Tercer Mundo mismo. Su comprensión de los desastres actuales en el Tercer Mundo, bajo el efecto, entre otras cosas, de las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial -sujeto de numerosas contribuciones-, inmuniza absolutamente a The Ecologist contra el entusiasmo de moda por las "virtudes" del liberalismo y del mercado libre a ultranza.

El editorial de su edición de enero-febrero de 1991, redactado por uno de sus cuatro editores, constituye un texto completamente apasionante. Es cierto que su idea de una "ecología de la liberación " es una fórmula que esperaban confusamente todos los que no han dejado de creer que una fusión del radicalismo ecológico y del radicalismo democrático y social era una necesidad. Nicholas Hildyar apunta por otra parte de forma explícita a "llevar a cabo alianzas".

Se ve claramente que lo que ha radicalizado el discurso político de The Ecologist es la preocupación por la crisis del Tercer Mundo: la clara visión de que la lucha contra la destrucción de la naturaleza se une allí a la lucha de las poblaciones contra la explotación y la opresión. De ahí N. Hildyard concluye que toda lucha ecologista pasa por la reconquista del poder por las poblaciones sobre las decisiones económicas y sociales, contra las minorías dominantes y sus Estados.

Ciertamente, mantenemos nuestras reticencias respecto a una cierta idealización del pasado y de su "economía popular tradicional" que se encuentra un poco por todas partes en el artículo. Pero la afirmación de la centralidad de la lucha de la gente por su poder, por la democracia directa radical en todos los terrenos, entre otros en el terreno ecológico, completa y se une a temas que nos son propios. ¿No había dicho un tal Marx que "la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos?". N. Hildyard, en un contexto diferente, y por otro camino, retoma este principio proclamando segín el cual la resolución de la crisis ecológica será la obra de las poblaciones emancipándose ellas mismas.

NOTAS

1.- J. Lovelock ha desarrollado esta hipótesis en dos obras: "Gaia:A New Look at Life on Earth" y "The Age of Gaia". Pierre Lehmann resume así esta hipótesis: "Las condiciones fisicoquímicas en la superficie de la Tierra están ajustadas permanentemente por la vida de forma que sean óptimas para la vida. Se postula pues que el envoltorio exterior de la Tierra, incluídas sus características geo-fisico-químicas, ha sido moldeado por la vida y para la vida", en Pierre Lehmann, Retour a la vie, WWF, 1989.

Nicholas Hildyard

Por una ecología de la liberación

La principal característica de la economía de mercado moderna es que es explotadora. Explotadora del medio y explotadora de las personas. Que sea explotadora del medio es hoy algo tan bien documentado que no es necesario repetir las pruebas. Pero que sea explotadora de las personas ha sido muy a menudo dejado de lado por los ecologistas.

Es hora de que esta cuestión sea colocada en primer plano y que el movimiento ecologista comience a hacer causa común con militantes sociales, tanto en el Sur como en el Norte. Es hora, en efecto, de reconocer que si el movimiento ecologista puede útilmente llamar la atención del público sobre los problemas del medio, no puede esperar abordarlos sin considerar también la cuestión más fundamental de la justicia social. Y esto quiere decir enfrentarse a las cuestiones fundamentales: cómo está organizada la sociedad, quién controla los recursos y tiene el poder de decisión, quién se beneficia de las políticas sociales y económicas en curso, y quien las sufre; y cómo estas políticas se ponen mejor en cuestión.

Los "residuos humanos"

En el Sur, la conexión íntima entre la crisis ecológica y las cuestiones más amplias de la justica social y económica se presenta de una forma clara. Miles de personas son cada día echadas al basurero humano por la carrera hacia la ganancia económica y política a corto plazo. Sus bosques son cortados por compañías cuyo único interés es sacar la mayor fortuna financiera posible de una sola tala; sus ríos son frenados por pantanos o polucionados a fin de promover un desarrollo industrial que no les beneficia; sus tierras confiscadas para plantar cultivos que se exportarán al Norte, sus vidas cotidianas oprimidas por la deuda, la insolvencia y, a menudo, por la opresión política. Un aldeano de Nueva Guinea, amenazado de ser expulsado por un proyecto de pantano, expresa de forma contundente el sentimiento de opresión que muchos sienten en el Sur: "Nos hemos convertido en residuos humanos".

En el Sur, los problemas de justicia social y de destrucción del medio ambiente están ligados de una forma manifiesta a la imposición de políticas de desarrollo que están minado los medios de existencia de la mayoría en interés de una minoría. En el Norte, la relación no está tan clara, pero no es menos estrecha. Un nivel de vida elevado, un grado de prosperidad, que no ha sido posible más que por la explotación del Tercer Mundo, preservan a la mayoría de nosotros de los efectos destructivos de la sociedad industrial moderna. Pero como en el Sur, esta protección no existe para los pobres: quienes viven de sus subsidios de paro pueden preocuparse apasionadamente de las cuestiones medioambientales, pero no pueden generalmente hacer nada sobre ello. Su pobreza les niega la "elección del consumidor" que se ofrece a los más ricos; no pueden preferir Perrier al agua polucionada de su grifo. Igualmente, la amenaza, y más a menudo, la realidad, del paro tiene por consecuencia que los pobres no tienen frecuentemente otra elección que aceptar empleos altamente polucionados y evitan prudentemente exigir condiciones de trabajo más sanas por temor a perder su empleo. En realidad, cuanto más pobre es una comunidad, más se la considera el vertedero para cualquier industria polucionante.

Un solo ejemplo: recientemente el servicio californiano de eliminación de basuras ha pagado 500.000 dólares a una oficina de consultores de Los Angeles, Cerrell Associates, por identificar las comunidades locales que son menos susceptibles de rechazar "una asignación de territorio localmente indeseable " ("Locally Undesirable Land Use"), el eufemismo de la jerga de los industriales para designar un depósito de residuos tóxicos. El estudio ha concluído que estas comunidades son las rurales, pobres, políticamente conservadoras, "abiertas a las promesas de ventajas económicas", poco instruídas y ya comprometidas en "actividades de explotación naturales", como por ejemplo la agricultura, la ganadería o la extracción minera. En consecuencia, las empresas de desechos reciben el consejo de "marcar" comunidades que, en la óptica de los consultantes son demasiado estúpidas, demasiado desorganizadas, demasiado pobres y demasiado respetuosas de la autoridad para oponerse al emplazamiento de residuos que no serían aceptados en comunidades locales más ricas, más instruídas, zonas habitadas por miembros de profesiones liberales.

Está claro; el Norte tiene también sus "residuos humanos".

Privación y marginación.

El estudio de Cerrell no revela solo el cinismo de las burocracias modernas. De hecho la cuestión que la industria de los residuos planteaba a Cerrell era: "¿Qué es lo que hace a una comunidad humana vulnerable a la explotación?". Carrell habría podido contentarse con responder "bajas rentas": pero eso habría sido una respuesta incompleta y engañosa, pues hay muchas comunidades pobres en los EEUU que se han opuesto con determinación al emplazamiento de un depósito de residuos.

Lo que hace la sofisticación del estudio de Cerell, es que ha identificado muy corrrectamente las bajas rentas como uno solo de los factores que privan de poder a una comunidad, que marginan hasta tal punto a la gente, económica, social y políticamente, que no ve otra opción que participar en un sistema que es explotador no solo del medio ambiente, sino también de su salud, de la salud de sus hijos, de su comunidad y del sentimiento de su propia dignidad. Es este estado de privación de poder, de marginación, el que distingue las comunidades "marcadas" por Cerrell de las demás: y esta es una situación engendrada por fuerzas que no pueden ser reducidas a una simple carencia material.

El proceso de privación del poder.

La privación del poder no es un fenómeno reciente. En el Norte, el proceso ha estado inextricablemente ligado a la emergencia de la economía de merca-

Nicholas Hildyard

do; el reemplazamiento de la economía informal por la economía formal; la introducción del trabajo asalariado; la alienación de la tierra y otros recursos clave del uso en común (incluso si la propiedad no era forzosamente comunal); la erosión de las estructuras políticas locales por el avance del Estado; la adopción de tecnologías centralizadoras y grandes consumidoras de recursos pero poco creadoras de empleos; y las economías de escala.

Ser privado de poder es más que verse negado el derecho de voto o privado de estructuras de gobierno formalmente democráticos. Pues tener un poder real, el poder que confiere a una comunidad la competencia de zanjar en decisiones que afectan a su vida cotidiana y su futuro, implica más que simplemente poder echar cada cinco años una papeleta de voto en una urna: exige que la comunidad como un todo, sea capaz de ejercer un control significativo sobre sus asuntos económicos, sobre sus asuntos sociales y sobre sus asuntos políticos.

La privación de poder existe cuando el control es efectivamente retirado a la comunidad y confiado en su lugar a intereses que, o no son representativos de la comunidad, o no le están ligados por ninguna obligación social, o no tienen ningún interés a largo plazo en su bienestar. Esta transferencia de poder engendra inevitablemente un nuevo juego de estructuras políticas, económicas y sociales: la sociedad es reorganizada mientras las viejas obligaciones y relaciones sociales son transformadas; y es esta reorganización de la sociedad, más que la mesa electoral, la que determina en qué medida la gente tiene más o menos poder.

Desde el punto de vista histórico, la fuerza más poderosa que ha privado a la gente de poder, ha sido la emergencia de la economía de mercado. Mientras que la economía popular tradicional cedía el sitio a la economía formal, actividades económicas que estaban antes enraizadas en relaciones sociales, se han encontrado monetarizadas: salarios y dinero, más que cooperación y dependencia mutua, se han convertido en la base de la subsistencia. Lazos sociales sutiles que en muchos casos permitían a la comunidad actuar en el interés colectivo son minados por nuevas relaciones sociales creadoras de antagonismos y de divisiones. De forma análoga, recursos comunes, como la tierra y el agua, se convierten en mercancías y su acceso no está ya determinado por los lazos sociales sino por el mercado. De forma creciente las comunidades pierden el control sobre sus actividades económicas y, por ello, su poder disminuye. Sus vidas se hacen dependientes de mercados sobre los que no tienen ninguna influencia, determinadas por decisiones en las que no han tomado parte (y en las que nunca podrán tomar parte) y por fuerzas que no podrán nunca comprender plenamente; fuerzas que tampoco pueden comprender los economistas.

La privación de poder es un proceso que se autoalimenta. Cuando las funciones que cumplía antes la comunidad son eliminadas una a una, la comunidad se atrofia como fuerza social, económica y política: deja de funcionar como comunidad justamente porque tiene cada vez menos funciones que cumplir. Pierde su cohesión y se hace incapaz de resistir al desarrollo de la intrusión, no solo del mercado sino también de las burocracias que se introducen para tomar en sus manos las funciones que la comunidad llevaba a cabo anteriormente; la educación de sus hijos, por ejemplo, o los cuidados a los viejos y a los enfermos. Verdaderamente, es una de las ironías del mercado que a pesar de las proclamaciones de los liberales que tanto le adulan, no pueda funcionar sin Estado: pues es el Estado quien recoje a los desgraciados expulsados por el mercado, a los "residuos humanos". Es el mercado el que engendra una gran parte de la espantosa pobreza que caracteriza hoy tantas ciudades del mundo industrializado, pero es el Estado el que debe asumir el problema. Y haciendo esto, provoca todavía más privación de poder, haciendo a la gente dependiente de una burocracia que debe responder a mil demandas diferentes con recursos limitados en tiempo y en dinero; y una burocracia que por naturaleza, es mucho más distante e impersonal para tratar a la gente de otra forma que como un "problema".

¿Quién tiene el poder?

El proceso de privación del poder ha sido acelerado a través de la imposición en el Sur de políticas de desarrollo modernas. Estas políticas sirven específicamente (y explícitamente) la intención de restructurar las sociedades del Tercer Mundo a fin de que puedan ser incorporadas a las estructuras económicas, políticas y sociales producidas por la industrialización en el Norte. No es sorprendente que los agentes principales, y los beneficiarios, del proceso de "desarrollo" hayan sido esas burocracias erigidas en corporaciones (entre las cuales está el Estado) a los que ha ido a parar el poder del que gozaban antes las comunidades en el Norte.

Esto es cierto tanto para las economías de mercado del Oeste, como para las "economías de mando" del bloque del Este. Como J.K.Galbraith señalaba: "El poder decisivo en la sociedad industrial moderna es ejercido no por el capital sino por la organización, no por el capitalista sino por el burócrata industrial. Esto es cierto en los sistemas industriales occidentales. Es cierto también en las sociedades socialistas... Pues la organización, es decir la burocracia, es inevitable en la tecnología industrial avanzada".

Es vital comprender los intereses, y el comportamiento, de tales organismos burocráticos, si queremos poner en cuestión las fuerzas que están destruyendo el medio ambiente y marginando a los pueblos. Instituídas para fabricar o vender tal o cual mercancía, para proporcionar tal o cual saber especializado, para ofrecer tales o cuales servicios específicos, las diferentes burocracias se preocupan ante todo de promover sus propios intereses, perpetuarse y aumentar su poder y su influencia. Este deseo de autopreservación engendra un punto de vista estrecho, con orejeras, una visión "en túnel" que tiene su propia dinámica. Las decisiones no son tomadas porque son deseables por razones sociales o ecológicas sino porque sirven a intereses particulares. En realidad, vemos repetidamente que organizaciones especializadas han manipulado la investigación, deformado análisis costos-beneficios y suprimido informaciones con el objetivo de vender productos conocidos por su nocividad o con el objetivo de continuar actividades que son nefastas para el medio ambiente.

Las lecciones

El poder del que disponen las burocracias, y la privación concomitante de poder de las comunidades locales, es un aspecto central del Estado industrial moderno, de hecho, del conjunto del proceso que llamamos"desarrollo". Es la clave para comprender la creación sistemática de "residuos humanos", tanto en el Norte como en el Sur; la clave para comprender la destrucción de nuestro medio ambiente; y también la clave para comprender cuales son las fuerzas que bloquean el cambio. Pues estas burocracias dominan hoy

nuestras vidas. De hecho, estamos inextricablemente mezclados con ellas y moldean nuestro futuro. Son también el principal obstáculo para el cambio. Así, si la energía nuclear es hoy preferida por los gobiernos como "solución" al efecto de sierra, no es por la inexistencia de otras opciones , sino porque esas opciones no favorecen a las prioridades de las burocracias que dominan el sector energético. Si la agricultura orgánica no ha sido ampliamente adoptada, no es porque es una alternativa impracticable, sino porque ha sido sistemáticamente difamada como impracticable por la industria agro-alimenticia.

Intentar reformar esas burocracias puede retrasar la crisis ecológica, pero no nos acercará a su solución. La solución, no vendrá mas que si estamos preparados, como movimiento ecologista, para enfrentarnos al problema más fundamental de la privación de poder: arrancar el poder a las burocracias para devolverlo a la comunidad. Es decir tomar en serio la reivindicación de las comunidades en el Tercer Mundo y otras partes, que quieren que los habitantes locales tengan el poder de decisión sobre sus recursos.

Para hacer esto el movimiento verde no puede actuar aisladamente. Y no puede triunfar si sus campañas no abordan problemas sociales más amplios. Orientar nuestras campañas hacia el problema de la privación de poder puede ser uno de los medios de progresar, no sólo permitiendo al movimiento concluir alianzas más amplias, sino también permitiéndole resistir más fácilmente la opinión según la cual la crisis ecológica sería una crisis puramente técnica. Cuando proponemos soluciones, no deberíamos sólo preguntarnos: "¿Va esto a eliminar una amenaza para el medio ambiente o promover la restauración ecológica?",sino: "¿Va a favorecer esta solución los intereses de las burocracias oficiales o los de los habitantes?". En definitiva, "esto va a impedir o a animar a las comunidades a reforzar su poder o va a aumentar su marginación?"

Pues en última instancia sólo por el compromiso directo y decisivo de los habitantes locales y de sus comunidades en la búsqueda de soluciones se resolverá la crisis económica. Como ha dicho Lois Gibbs, de la "Coordinadora de ciudadanos contra los residuos tóxicos", un grupo ecologista local en los EEUU :"El cambio no resulta de tecnicas astutas de presión institucional, o de hábiles investigaciones científicas, o de "magia" sino sencillamente de la confianza en el sentido común de la gente y de su voluntad de actuar una vez que es consciente de los problemas".

Los grupos ecologistas no pueden nunca rivalizar en poder financiero con los intereses a los que se enfrentan invariablemente. Pero disponen de una riqueza cuya fuerza, una vez que se recurre a ella, no debería ser subestimada: la gente, el pueblo.

Los teólogos de la liberación han argumentado desde hace mucho que la Iglesia era poco pertinente mientras no estuviera dispuesta a abordar el problema del poder y de la opresión. Los ecologistas tienen necesidad de abordar eso mismo también: nos hace falta una "ecología de la liberación".



TEMA 85

Bandiera Rossa

Ecología soviética

Ciencia y poder en la URSS, desde Lenin hasta Stalin

El proceso de desarrollo de la ecología soviética debe situarse en el marco más amplio de las relaciones entre ciencia y poder en la URSS a partir de 1917. Desde hace tiempo y por lo que respecta a esta cuestión, la historiografía más seria ha venido estableciendo una clara división entre una primera fase (que podríamos denominar "leniniana") y la fase de la total sumisión de la ciencia al poder burocrático, que data de principios de los años treinta y por ende a partir de la progresiva preeminencia de los hombres y de los métodos del nuevo dueño del Kremlin también en el seno de las instituciones científicas.

Una clara expresión del planteamiento de Lenin con respecto al problema de la relación ciencia-poder, la constituye el acuerdo firmado en abril de 1918 entre Lunacharsky, comisario del pueblo para la Educación (N del T), y Sergej Oldemburg, secretario permanente de la Academia de Ciencias, mediante el cual el nuevo poder revolucionario se comprometía a respetar la autonomía de las instituciones científicas y universitarias; por su parte, éstas aceptaban colaborar lealmente con el nuevo gobierno (todavía a finales de los años veinte, los militantes comunistas representaban una exigua minoría entre los investigadores y los funcionarios estatales).

Aprender...

La posición de Lenin (compartida por Trotsky) parte de la firme convicción de que no es posible improvisar una nueva "ciencia proletaria" tal y como pretenden otros bolcheviques (entre los que sobresale Bogdanov), que debería contraponerse a la vieja "ciencia burguesa", según una interpretación del marxismo absolutamente mecanicista y abstracta. En el centro de las preocupaciones de Lenin está el tremendo atraso del país; por ello, por una parte es necesario recurrir a los así llamados "especialistas burgueses" (reconociéndoles unos privilegios materiales que presentan un claro contraste con el espíritu de la revolución), y por otra hay que comprometerse en un gran esfuerzo de educación básica con el fin de permitir a millones de trabajadores y campesinos el poder llegar a ser sujetos conscientes de la construcción de la nueva sociedad.

Antes de ir más allá de la cultura burguesa, hay que conseguir la superación de los restos de los tipos más odiosos de la cultura preburguesa, es decir, la cultura burocrática, la feudal, etc... escribe Lenin en "Mejor menos, pero mejor", un artículo de 1923; por ello, "debemos imponernos a toda costa el deber de aprender en primer lugar y, posteriormente, el de controlar aquello que se ha aprendido con el fin de que la ciencia no se quede en letra muerta o en frase de moda (como ocurre con frecuencia, y no existe razón alguna para ocultar, en nuestra sociedad); para que la ciencia se haga realmente carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, para que se transforme completamente y de una manera real en una parte integrante de nuestra vida" (1). Por lo tanto es necesario que el nuevo Estado consiga movilizar junto a él y en aras de las inmensas tareas que le esperan, al máximo de las fuerzas científicas y culturales disponibles, que son las que se han heredado de la fase precedente, y que, a menudo, están profundamente impregnadas de ideologías conservadoras y reaccionarias. Por otra parte, los avances en este terreno no pueden ser fruto de intervenciones voluntaristas, como en los campos político y militar, sino que sólo pueden ser alcanzados mediante un trabajo largo y paciente que tiene sus propios medios y sus propios métodos, los de la comprobación intelectual y las lecciones de la experiencia, en un marco de pluralismo cultural y de autonomía en la investigación.

Cuando en enero de 1922 un grupo de investigadores marxistas (entre los que se encontraba Deborin) funda la revista "Podzanamenem marksizma" (Bajo la bandera del marxismo) con la intención de convertirla en el "órgano del materialismo militante"), Lenin envía una comunicación (que aparece en el segundo número de la revista) en la que señala cuales deben ser las prioridades en las que debería basarse la batalla cultural: "es necesario conseguir 'la alianza con los materialistas consecuentes no pertenecientes al partido', especialmente, con los 'representantes de las ciencias naturales que se inclinan hacia el materialismo'. Los investigadores comunistas no deben distanciarse de los no comunistas. Se necesita un materialismo 'moderno', es decir, 'dialéctico', y con este objeto Lenin explicita la conveniencia de estudiar a Hegel desde un punto de vista materialista. Además hay que prestar una atención preferente a las ciencias naturales, que están atravesando un periodo de rápidos progresos y de 'ruptura revolucionaria' tales, que no pueden prescindir de las deducciones filosóficas (2).

El episodio Pavlov

El episodio protagonizado por el gran fisiólogo Pavlov, resulta característico del clima que es estableció durante esos años. En 1924 Pavlov abre una serie de conferencias en la Academia militar de Leningrado, atacando al marxismo y, personalmente y de una forma particularmente dura, a Bujarin. El dirigente comunista respondió al científico con una gran corrección: rechaza sus ataques al marxismo pero reafirma la importancia de las contribuciones científicas de Pavlov, e insiste en su respeto hacia los trabajos del académico: "Científicos así, escribe Bujarin, independientemente de sus intenciones subjetivas, trabajan para la misma causa por la que trabajamos nosotros, los marxistas revolucionarios". Tras este intercambio de polémicas entre el octogenario investigador y el joven dirigente revolucionario (por otra parte, un apasionado de la biología), se instaura una curiosa relación de amistad y estimación recíprocas (3).

Hacia finales de los años veinte el clima se deteriora rápidamente, precipi-

tándose el choque entre la fracción estaliniana y la "derecha" bujarinista. En el centro del conflicto se encuentran las alternativas con respecto a las orientaciones en el campo económico. El país vive de nuevo un periodo crítico. Tras los éxitos de los primeros años de la NEP, (la Nueva Política Económica iniciada en 1921), emerge con fuerza la evidencia de la imposibilidad de seguir confiando en las dinámicas de una economía fundamentalemente privada (sobre todo en la agricultura). La exigencia de establecer el desarrollo de una colectivización voluntaria en el mundo campesino ya había sido puesta en evidencia en 1923 por la Oposición de Izquierdas; pero esta posición había sido derrotada. Se había impuesto la línea sintetizada por la consigna bujariniana: "¡Enriqueceos!", dirigida a los campesinos; es decir, la de la confianza en la actuación de las fuerzas espontáneas animadas por la NEP. Sin embargo la situación se precipita "con la crisis de las acumulaciones" (NdT: a finales de 1927), cuando se comienza a perfilar el espectro de un grave déficit de abastecimiento de alimentos en las ciudades, entre otras cuestiones también porque los campesinos retienen los excedentes y no los venden al Estado. "Se busca una solución de urgencia y a principios de 1928" (4), y se ejecuta mediante sistemas administrativos, tal y como solía hacer Stalin: se toma la decisión de que el primer plan quinquenal (octubre de 1928) establezca la industrialización a "marchas forzadas", en función de ritmos absolutamente irreales; la colectivización de los campos asume rápidamente la forma de una trágica guerra civil conducida (por parte del poder burocrático) contra la masa de los campesinos (con la excusa de la lucha contra los más ricos, los kulak), cuyas consecuencias fueron desastrosas para la agricultura soviética durante un largo periodo.

Un ciclón

En este marco, "un ciclón de grandes proporciones" (5) se cierne también sobre el mundo científico y cultural. El hecho es que el monopolio del poder absoluto implica inevitablemente la imposición de una uniformidad de pensamiento en todos los ámbitos. A partir de ese momento se teoriza abiertamente la "implicación partidista de la ciencia" y se afirma la existencia de la contraposición -la que en su tiempo fué rechazada por Lenin- entre "ciencia proletaria" y "ciencia burguesa". Con ello queda abierto el camino a las interferencias directas del poder político en el seno de las controversias científicas y filosóficas mismas (6). Secundariamente, los proyectos de modernización en los que Stalin estaba implicando -de forma aventurera- al país, necesitaban de la colaboración dócil y subordinada de los cuadros técnicos y científicos. El criterio de la "práctica", en cuyo nombre se promovía o excomulgaba esto o aquel planteamiento, tiene ante todo el siguiente significado: la inmediata aquiescencia al diktat del Kremlin; la discusión de los objetivos formulados no compete a los cientificos.

No obstante, inclusive este ámbito de relativa autonomía es extremadamente precario -como demuestra la peripecia de la genética- dado que Stalin no duda en entrometerse a placer en cuestiones teóricas de las que no entiende absolutamente nada, y su palabra es la que decide que es lo que hay que considerar como probado y que es lo que no lo ha de ser.

A principios de los años treinta la genética soviética ofrece ya resultados de relevancia internacional. No es poco el mérito que al respecto debe imputarse Nicolaj Ivanovic Vavilov, director del Instituto de Genética de la Academia de Ciencias, y fundador de la Academia Pansoviética de Ciencias Agrarias Lenin. A principios de los años veinte, y con el apoyo del Gobierno, Vavilov promueve la constitución del Instituto Pansoviético de Cultivo de las Plantas (VIRV), que se convierte rápidamente en una institución única en su género, adquiriendo fama mundial. En el VIRV se recogen plantas de todos los rincones de la URSS y, a partir de 1925, de todo el mundo, con el fin de estudiar la adaptación de las mismas a los distintos climas para mejorar la seleccion de las semillas (que posteriormente son puestas a disposición de todos los organismos agrónomos del país), y para desarrollar investigaciones teóricas sobre la base de la genética mendeliana. Vavilov llegó incluso a descubrimientos originales a lo largo de este trabajo, como el de la existencia de centros geográficos de variabilidad para las plantas cultivadas, o el del paralelismo de las variaciones de las especies de familias afines (ley de las series homólogas de variabilidad). Sin embargo la validez de la teoría mendeliana es objeto de controversias por motivos esencialmente ideológicos: para algunos, la inmutabilidad de los genes está en contraposición con el materialismo dialéctico. Aún así lo cierto es que la posición de Vavilov sólo empieza a ser atacada seriamente hacia la mitad de los años treinta. La corriente que se opone a la genética mendelina encuentra su dirigente en el ingeniero agrónomo Tofim Denisovic Lysenko, que debe su notoriedad a su procedimiento para la aceleración de la maduración de las semillas, descubierto casi por casualidad, pero que está respaldado por uno de los más flamígeros teóricos del alineamiento partidista de la ciencia, Isaac Prezent. Afirmando que se basa en los resultados empíricos de un ingeniero agrónomo diletante, Ivan Miciurin, al que él mismo rindió culto, (Miciurin murió en 1935), Lysenko pretende contraponerse a Vavilov mediante una nueva genética. En realidad lo que hace es reproducir viejas ideas lamarkianas respecto a la influencia directa del ambiente en la producción de mutaciones en los organismos y sobre la herencia de los caracteres adquiridos.

El favor de Stalin permite a Lysenko apartar de su cargo a Vavilov, que es arrestado mediante imputaciones falsas y condenado a muerte en 1940; muere en la cárcel en enero de 1943 (es reabilitado en 1955). Algunos entre sus colaboradores corren su misma suerte. Lysenko, por contra, domina completamente la escena durante toda la época estalinista. Aunque es expulsado durante la primera fase de desestalinización, consigue sin embargo volver a encaramarse a la montura en 1961, para ser alejado de la misma de una manera definitiva en 1965, tras la caída de Kusciov; no sin haber conseguido, previamente, producir daños irreparables en la agricultura soviética. Todo el estilo de este personaje se resume en la carta que hizo enviar a Stalin por parte de los participantes en la sesión de 1948 de la Academia de Ciencias Agrarias, en la que el tirano del Kremlin es grotescamente definido como "jefe del pueblo y corifeo de la ciencia de vanguardia" (7).

Bandiera Rossa
Traducción: Miquel Novajra

NOTAS

1. Citado por Silvano Taglagambe en "Scienza, filosofía, política en Unione Soviética 1924/1939" ("Ciencia, filosofía, política en la Unión Soviética 1924/1939") Ed. Feltrinelli, Milano, 1978 pp.26-27; el artículo de Lenin se encuentra también en apéndice en Moshe Levin "L'ultima battaglia di Lenin" ("La última batalla de Lenin") Laterza, Bari 1969 pp. 174-190.

2. En S. Tagliagambe, op. cit. pp. 87-89.

3. El episodio, indicado por Roy Medvedev y por Stephen Cohen, también en Antonio Moscato "Intelettuali e potere in URSS (1917,1956), Ed.Milella, Lecce 1986 pp.28-31.

4. Giuseppe Boffa "Storia dell'Unione Soviética 1928-1941." ("Historia de la Unión Soviética 1928/1941") L'Unità 1990 p.11.

5. La expresión es de S. Tagligambe, op.cit.p.140.

6. Entre los primeros en "pagar el pato" están los "dialécticos", o el grupo que se constituyó entorno a Deborin, que entre 1929 y 1930 goza de una temporánea hegemonía en el ámbito filosófico y en el de las Ciencias Naturales.

En diciembre de 1930 Stalin acusa personalmente a Deborin y a su escuela, de "idealismo menchevique mencheviquizante"; inmediatamente después (enero 1931) llega la condena del Comité Central contra las revistas de la corriente y las acusaciones administrativas promovidas por los defensores del partidismo de la ciencia.

7. La carta aparece publicada en Silvano Tagliagambe, "Scienza e marxismo en la URSS"), Loecher, Torino 1979.

Sobre el caso Lysenko, Dominique Lecourt, "Il caso Lysenko" ("El caso Lysenko") Editorial Riuniti, Roma 1977; Zores Medvedev, "L'ascensa e la caduta di T.D. Lysenko" ("Ascensión y caida de T.D. Lysenko") Mondadori, Milano 1971.

Sobre el estainismo y las ciencias, es útil también la consulta de Roy Medvedev, "Lo stalinismo" ("El estalinismo"), Mondadori, Milano 1972.

CUADERNOS DEL

ESTE

Estimado amigo:

Acaba de ver la luz el tercer número de CUADERNOS DEL ESTE. Pese a los obstáculos asociados a la edición de una nueva publicación y a lo específico de la temática, la revista ha ido cubriendo el vacío editorial existente en nuestro país. Al cabo de un año nuestro propósito de seguir adelante se ha fortalecido, y trabajamos ya en la elaboración de nuevos números que estimamos serán de vuestro interés (Alemania, la mujer en la Europa central y oriental, los problemas nacionales...). Por añadidura, en adelante vamos a contar con un respaldo importante, como es el que se apresta a proporcionarnos el Rectorado de la Universidad Complutense.

Por razones que no te será difícil comprender, nos hemos visto obligados a incrementar el precio de un producto cuyos costes son, por naturaleza, elevados. El apoyo económico y las sugerencias intelectuales de nuestros suscriptores siguen siendo el principal elemento de subsistencia de una revista como la nuestra. Por ello te proponemos que formalices/renueves tu suscripción —al respecto preferimos que utilices la fórmula de la domiciliación bancaria— y que no dudes en hacernos llegar tus comentarios y tus expectativas con respecto a esta publicación.

Recibe un cordial saludo,

CUADERNOS DEL ESTE

BOLETIN DE SUSCRIPCION

Nombre ....

Dirección ....

Ciudad .... C. P. ....

País .... Teléfono ....

SUSCRIPCION POR UN AÑO (tres números)

— España. Suscripción normal .... 2.800 pesetas
— Extranjero .... 35 dólares

A partir del número ...., inclusive.

FORMA DE PAGO

☐ Transferencia bancaria a la C/c 6000009409 de la Sucursal 1877 de Cajamadrid.

☐ Giro postal número .... a nombre de Centro de Estudios de Países del Este.

☐ Cheque nominativo a favor del Centro de Estudios de Países del Este número .... del Banco/Caja de Ahorros ....

50.000 miembros en toda la URSS, es poco, pero se trata de gente en su mayor parte muy comprometida.

La dirección del SIM ha trabajado también las reivindicaciones y ha redactado un proyecto de convenio colectivo para el sector. Lo presentamos al Gobierno, el 20 de enoviembre de 1990, y recibimos una respuesta negativa un mes más tarde. En caso de rechazo, la ley prevé la formación de una comisión de conciliación. La dirección del SIM había hecho una petición en ese sentido, pero las autoridades la ignoraron. Enviamos entonces una advertencia a Rijkov, Gorbachov y Loukianov (presidente del soviet supremo(nd.r): "Lo sentimos, pero debemos señalarles que si rechazan firmar un acuerdo colectivo, nos plantearemos lanzar la huelga general".

En aquel momento cambió el gobierno: Pavlov reemplazó a Rijkov. Enviamos de nuevo los documentos a Gorbachov, Pavlov y Loukianov. Ninguna respuesta. Habíamos pasado todas las etapas exigidas por la ley, y se seguían negando a negociar. Del 11 al 13 de febrero de 1991, convocamos una reunión de los representantes de nuestro sindicato y de los miembros de los comités regionales de huelga...

¿Justificaron su negativa las autoridades por falta de medios financieros?

No nos dieron ninguna razón. Nos ignoraron completamente, aunque habíamos dirigido la gran huelga de 1989. Frente a esto, decidimos preparar una huelga para la primavera, hacia fines de marzo o mediados de abril, y organizar reuniones sobre esta cuestión en las minas. Se encargó al ejecutivo del sindicato contactar con Gorbachov y prevenirle de que, si no respetaba los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (firmados por la URSS), que establecen el derecho a negociaciones colectivas y si violaba su propia ley sobre la resolución de los conflictos de trabajo, las minas se pondrían en huelga.

En ese momento intervino la política. El soviet supremo ukraniano votó una resolución transfiriendo las minas a Ukrania, como república soberana. Los mineros de Ukrania plantearon a sus autoridades que, puesto que habían declarado la soberanía de Ukrania, era normal que las minas pasaran a su jurisdicción. Pero añadieron que su salario base era sólo de 300 rublos y que, en julio de 1989, se les había prometido que los salarios serían indexados según los precios; pero no se había hecho. Otra promesa no mantenida: la extensión de las ventajas especiales en materia de jubilación a todos los que trabajaran en los pozos. Los mineros de Ukrania querían obtener satisfacción al menos sobre esos dos puntos.



Las autoridades ukranianas respondieron positivamente; pero en las discusiones no han aceptado más que la reivindicación sobre las jubilaciones, rechazando la de los salarios.

Los medios de comunicación -sobre todo los periódicos gubernamentales, que querían hacer creer que los mineros pedían absolutamente todo en detrimento del resto de la población- publicaron que pedíamos subidas salariales del 200% al 300%. De hecho, queremos una indexación, incluso no necesariamente completa; pero, después de todo, los precios acaban de multiplicarse por dos, por lo menos. Los comités de huelga en Ukrania dicidieron pues comenzar el movimiento antes de lo previsto.

En su inicio, debía tratarse de una huelga de advertencia de un día, pero las opiniones estaban muy divididas según las minas: algunas querían lanzar inmediatamente una huelga ilimitada; otras dejar seis días al gobierno tras un paro de advertencia. Según los estatutos, nuestro sindicato no puede dar órdenes a las secciones locales; cada una de ellas tiene el derecho a decidir por sí misma.

¿Cuándo se hizo política la huelga?.

Actualmente en este país se asiste a una lucha por el poder, y las diferentes autoridades no llegan a decidir como dividir la propiedad. Les hemos dicho que, o la dividían por repúblicas, o tomaban una decisión general para toda la industria.

Nuestro sindicato tiene una estructura federal. En el Kouzbass, los mineros han decidido que la huelga debía tener un carácter político y han pedido la dimisión de Gorbachov y la disolución del soviet supremo de la URSS. Así, durante las dos primeras semanas, en el Donbass y en Vorkuta, la huelga ha sido estrictamente económica; pero a partir del 15 de marzo, cuando el Kouzbass entró en el movimiento, se ha transformado en política.

Entonces, los mineros no pidieron inmediatamente la transferencia de la gestión de las minas a las diferentes repúblicas.

La mayoría de los trabajadores de Kouzbass lo deseaba desde el comienzo. Pero los niveles de conciencia política de los mineros son diferentes.

¿Habéis discutido sobre los problemas que ello podría tener para la solidaridad entre mineros de diferentes repúblicas?.

Aún no se ha planteado, pero pienso que lo será el próximo año.

¿Está organizado vuestro sindicato por repúblicas?.

No, por el momento, pero quizá se haga. Los sindicatos oficiales están ya estructurados de esa forma. Nos acusan de querer dividir los sindicatos, pero ellos han sido los primeros en dividirlos en estructuras regionales. Esto no significa grandes diferencias para los obreros: respirar el polvo de carbón

en el Donbass o en el Kouzbass, es lo mismo.

¿Qué plantea vuestro proyecto de convenio colectivo sobre el cierre de pozos?.

Proponemos una serie de medidas al gobierno: en primer lugar, llevar a cabo encuestas sobre la situación de las minas a fin de determinar cuanto tiempo aún podrá ser explotada cada una de ellas. Así, los mineros estarían prevenidos con suficiente antelación de lo que les reserva el futuro, y sabrían que deben reciclarse.

Pedimos también garantías sociales: subsidios de paro y, si fuera necesario, la concesión de indemnizaciones durante tres años a los mineros despedidos, para que puedan coger una nueva profesión. El empleo es ahora una de las prioridades de la negociación colectiva -el proyecto de ley de la URSS sobre el empleo es muy malo-.

¿Responde a las preocupaciones de los mineros del Donbass el proyecto de negociación colectiva?

No ciertamente. De hecho, algunos mineros del Donbass no han hecho huelga debido al miedo a que sus minas fueran cerradas, aunque les hayamos dicho: "¿Qué diferencia hay de que las cierren ahora a dentro de un año y medio?. ¿No sería mejor pelear para que os garanticen algo cuando cierren?".

¿Ha elaborado vuestro sindicato un programa de reestructuración de la economía en las regiones mineras?.

Estamos creando un fondo de desarrollo y de defensa social, consagrado a todos esos problemas; eso debería permitir, por ejemplo, crear nuevos empleos en la construcción o en la industria. Hacemos eso a la vez que continuamos pidiendo al gobierno garantías en materia de empleo y seguros de desempleo. Pues todo Estado, cualquiera que sean sus objetivos proclamados, oprimirá siempre al individuo, y restringirá sus derechos. Debemos pues crear estructuras no gubernamentales. Intentamos ya poner esto en práctica en la cuenca de Tula, al lado de Moscú.

¿Estarán esas estructuras controladas únicamente por los mineros?

No, serán como grandes empresas, creadas a partir de los fondos de varios sindicatos independientes, que darán al mismo tiempo empleos a los mineros. Pero sigue siendo un proyecto. Aquí, en la URSS, nadie se dedica a seme-



jante tarea por el momento; todo el mundo cuenta con el Estado.

Eltsin explicó en el Kouzbass el acuerdo entre Gorbachov y los dirigentes de nueve repúblicas. Los periódicos dicen que primero se reunió en Moscú con los dirigentes mineros y que, alarmado por vuestra reacción, decidió ir directamente al Kouzbass.

El consejo interregional, que es el comité de huelga a escala de toda la Unión, había pedido una reunión con Eltsin. Pero éste prefirió reunirse sólo con dos representantes del Kouzbass: Golikov (presidente de la Unión de los colectivos de trabajadores del Kouzbass, ndlr) y Malykin (miembro de la dirección del SIM, ndlr).

Eltsin no fue al Kouzbas por nosotros, sino porque recibió docenas de telegramas, sobre todo desde el Kouzbass, pidiéndole una explicación sobre el "régimen de trabajo especial" que, según el acuerdo firmado con Gorbachov, debería ser instaurado en los sectores esenciales de la industria. Al enterarnos de que Eltsin había ido al Kouzbass sin quedar con nosotros, decidimos enviar allí a algunos representantes, miembros de los comités de huelga regionales. Delegados de los comités de hulga de Rostov y del Kouzbass fueron allí.

Oyeron las explicaciones de Eltsin sobre el acuerdo. No se exactamente lo que pasó, pero sus argumentos no satisfacieron a los trabajadores. Era previsible porque, después de todo, Eltsin es un político.

¿Pensáis que sus promesas son realistas?

Los periódicos publicaron su decreto de transferencia de la industria del carbón a la jurisdicción de la República de Rusia. Las minas que lo deseen serán independientes y no tendrán mas que pagar sus impuestos; las otras serán subordinadas al Comité ruso del carburante y de la energía.

Ese arreglo, ¿no puede dividir a los mineros? Algunas minas son más rentables que otras...

Considero que la medida de Eltsin es populista. Quizás sólo conserve bajo jurisdicción rusa las minas aprovechables y deje las otras. Veremos. Pero la amenaza de cierre de pozos es real también en Rusia, incluso en el Kouzbass. En general, soy categóricamente hostil a las recetas globales. En los años 30 hubo una colectivización total; hoy quieren realizar una privatización total y a toda prisa, sin un estudio económico de la situación general de la industria del carbón. ¿Qué ocurrirá con las minas deficitarias? Necesitamos tiempo para estudiar estas cuestiones. Agitan ante los mineros la perspectiva de hacerles propietarios y dueños. Pero nadie sabe lo que pasará después...

Yo les dije lo siguiente a los representantes de la mina de Raspadskaya (una de las más grandes de Rusia, ndr): "En 1989, os propusieron alquilar la mina para convenceros de abandonar la huelga; hoy, en 1991, lucháis de nuevo y os proponen transformaros en compañía por acciones para que dejéis la lucha. ¿Por qué haréis huelga la próxima vez?. Todavía no habéis comprendido bien la primera etapa y ya os metéis en otra. Os arrojan migajas. Son consignas huecas, sin ninguna base económica, como en 1917". Es mi opinión personal y la de algunos de mis camaradas -esto nos vale a veces ataques exacerbados-.

¿Qué piensan los trabajadores de base?

Aquí también se dividen las opiniones. Quienes estudian estas cuestiones comprenden su complejidad, pero un obrero que ha pasado seis horas trabajando físicamente y que luego debe buscar alimento, evidentemente no se preocupa de ello. Se le dice: puede Vd. convertirse en propietario, antes trabajaba Vd. sin serlo; y piensa que quizás sea cierto.

Estamos desarrollando un proceso de autoeducación. No tenemos confianza en los economistas, que pueden proponer análisis diferentes y contradictorios según quién les haya pagado. Analizamos un punto de vista y luego otro; intentamos comparar y luego sacamos nuestras propias conclusiones. Pero cuando comparamos los puntos de vista de diferentes economistas, partimos siempre de los principios del sindicato, que ha sido creado para defender los intereses de los trabajadores en materia de empleo, de salarios, de salud y de seguridad. Ni el programa de Pavlov, ni el de Silaev (el Primer ministro de la República de Rusia, ndlr) tienen en cuenta estos problemas; ni siquiera los mencionan.

Nuestro pequeño sindicato independiente de mineros ha forzado al Estado a reconocer que deberían existir convenios colectivos generales en todos los sectores de base. Hasta los años 30, los sindicatos soviéticos hacían tales acuerdos, luego este derecho fue suprimido. Hata 1930, aproximadamente, era el Consejo Central de los sindicatos el que fijaba el valor del trabajo, pero luego se encargó la Comisión del Estado sobre el trabajo.

Hoy, los sindicatos oficiales tienen la ocasión de recuperar ese derecho, para aplicarlo en la industria petrolera, la metalurgia, la energía, etc. Pero dadas sus concepciones tengo miedo de que desvíen nuestro proyecto: sus dirigentes no saben cómo luchar para defender verdaderamente a los trabajadores, siempre han estado habituados a hacer concesiones. Hoy, anuncian que han cambiado de raíz. Ya veremos...

Hablando sobre la gestión de las empresas, en vuestro convenio colectivo ¿Quién elegirá al director?.

Analizando nuestro documento, se ve que cambiaría radicalmente las relaciones en todo el país. Antes se producía por producir: producíamos armas, ayudábamos a tal o cual país, etc. Ahora el principio básico debería ser que todo lo que se produce por la gente vuelva a ella. El salario de los obreros debería ante todo basarse en sus capacidades, sus conocimientos y el valor de su fuerza de trabajo. A este fin, habría que modificar la legislación del trabajo, así como el sistema de seguridad social y las leyes sobre la autogestión.

Nuestro proyecto de convenio colectivo no dice concretamente quién dirigirá las empresas. Precisa más bien que el Estado, que tiene el 90% de la propiedad (el resto son parcelas privadas, cooperativas y empresas privadas), compra nuestra fuerza de trabajo y tiene por tanto numerosas obligaciones hacia nosotros; debemos definir conjuntamente nuestros poderes respectivos. En primer lugar el Estado debe darnos trabajo y remunerarnos correctamente; actualmente no se nos paga durante las interrupciones de la producción, que no dependen de nosotros. Trabajamos por piezas y queremos ser pagados por horas. Pensamos que el 70% del salario debe ser horario y el 30% por piezas. El Estado debe garantizarnos un empleo y condiciones sociales y económicas decentes.

Sin embargo, no nos oponemos a que colectivos de trabajadores se conviertan en propietarios de sus empresas. Pero entonces los salarios y las condiciones de trabajo no deben ser peores que las fijadas por el convenio colectivo. Este debe aplicarse a todos los trabajadores asalariados, cualquiera que sea la forma de propiedad -privada, colectiva o de Estado. Hay que admitir que una persona trabaja para alimentar a su familia y para vivir decentemente, y no para alimentar a la familia del vecino o para realizar grandes ideas. El obrero, productor fundamental de todos los productos que existen, debe ser la piedra angular del sistema.

¿Qué forma de salario proponéis?

Trabaje sobre ese tema con mis compañeros cuando era aún presidente del sindicato de Estado de mi mina (fui elegido tras la huelga de 1989). Ahora una tasa del salario base se fija por la comisión del Estado sobre el trabajo; y se incluye en el coste y el precio del carbón, que también determina el Estado. Hemos comenzado a reflexionar

sobre cómo hacer para garantizar un salario mínimo. En la huelga de 1989 pedimos que el Estado pagara un precio fijo por cada tonelada de carbón.

Antes de la huelga teníamos sólo un salario base; luego estaban las primas ligadas al cumplimiento de la norma. Así, si faltaban dos toneladas para alcanzar las mil toneladas recibías, pongamos, 300 rublos; en cambio, si superabas la norma recibíais 600. Pero la producción del minero no depende sobre todo de su trabajo; las condiciones geológicas pueden ser malas, la electricidad averiarse, puede faltar material o romperse una máquina. Esto hace que trabajemos prácticamente por nada. Por tanto pedimos ser pagados a un precio fijo por tonelada, independientemente del plan. Hemos ganado, pero las autoridades intentan desvirtuarlo: ahora, recibimos un precio fijo por tonelada hasta cierto nivel, pero si ni estamos atentos los directores reintroducen solapadamente primas, normas, etc.

Luego, comenzamos a preguntarnos cómo se fijaban centralmente los salarios base, y por qué nos pagaban dos rublos de la hora y no seis, por ejemplo. Al acercarse el I Congreso de los mineros decidimos trabajar sobre ese tema, y continuamos en el II Congreso y luego la dirección ha seguido. Para nosotros, el salario de un minero debería componerse de cuatro elementos: un mínimo garantizado, correspondiente a la cesta de la compra, cualquiera que sean los paros de la producción; una indemnización garantizada para condiciones de trabajo peligrosas (concentración de polvo superior a la norma, presencia de metano, trabajo nocturno, calor superior a 26 grados, etc); una compensación por tiempo de transporte, limpieza, etc. -de hecho el tiempo estrictamente dedicado a la producción es de seis horas, pero te puedes pasar en total diez horas o más en el trabajo; Por último, sólo un cuarto aspecto del salario se basará en la calidad de la producción.

Ahora, el que el salario dependa de la producción obliga a violar las normas de seguridad y a trabajar en muy malas condiciones, lo que provoca silicosis y otras graves infecciones. Un trabajador no se preocupa de su vida. Los sindicatos del Estado pueden hacer cerrar una empresa si no responde a las normas de seguridad; pero no lo hacen, pues saben que los mineros deben ganarse la vida.

Evidentemente, el gobierno se opondrá a nuestras reivindicaciones pues plantean el problema de la organización de la producción. El Estado pretende que no puede pagar si los mineros no producen. Nosotros le respondemos: "Es su responsabilidad, señores directores, ingenieros jefe, responsables de gabinetes, ministro y Primer ministro. Pagamos impuestos al Estado, y hemos elegido diputados que os han designado. Se supone que sois especialistas cualificados".

Se critica la compensación por malas condiciones de trabajo; porque animan a tolerar e incluso a buscar trabajos penosos y, a la vez, porque la administración deja de estar obligada a mejorar las cosas.

Por el momento, no existe ningún tipo de indemnización en las minas, y, en nuestra opinión, la dirección debería crearla. Por ejemplo, según la norma una persona no debería llevar más de 50 kilos, sin embargo, como electricista en las minas, yo he llevado viguetas de acero que pesaban 60 o 70 kilos. Las direcciones se verán obligadas a tomar en cuenta estos problemas si deben dar un suplemento salarial bastante elevado.

Cambiando de tema, ¿qué relaciones tenéis con las distintas corrientes políticas?.

Nuestro sindicato se basa en principios puramente sindicales, al menos por el momento no apoya a ningún partido político. Hay también comités de huelga que no se han transformado aún en sindicatos y siguen más o menos las orientaciones de los demócratas, en el sentido soviético del término (es decir, los liberales, ndlr), representados por Rusia democrática -este fenómeno se da sobre todo en el Kouzbass-. Por ejemplo, Golikov, miembro del comité de huelga de Novokouznetsk y presidente dle Consejo de los comités de huelga del Kouzbass, es un cercano consejero de Eltsin.

¿Apoya la base las posiciones políticas de esos comités de huelga?

En gran parte sí. Después de todo, la idea de la soberanía es atractiva. El centro nos ha despojado durante mucho tiempo. Hoy se asiste a una lucha entre los boyardos (aristócratas, ndlr) comunistas y la nueva burguesía, que ha comenzado a hartarse de servirles y quiere dirigir ella sola. Nuestra burguesía está compuesta por gente que quiere invertir, pero cuyo único capital por el momento es el conocimiento. Han trabajado mucho tiempo para la aristocracia, al servicio de su ideología.

¿Hablas de la intelligentsia?.

Sí, de la intelligentsia, de los economistas, etc. Se asiste a un combate entre los boyardos y esta nueva burguesía. Para el movimiento obrero, es más justo hoy apoyar a esta burguesía pues, durante 70 años, la idea comunista de que "todo pertenece a todo el mundo" demostró no ser válida -aunque, en principio, es necesario un cierto grado de centralización y de planfiica-

ción-. Se trata de decidir lo que es racional.

La nueva burguesía propone un sistema que dé a los obreros una oportunidad de cambiar su fuerza de trabajo por una suma decidida en común. Ofrece un concepto normal de la sociedad, en la que todo el mundo tiene su oportunidad -aunque la realidad de tal principio esté lejos de ser evidente-. En la lucha entre los comunistas y la burguesía, apoyamos naturalmente a ésta última, porque la idea ortodoxa y vaga de los comunistas sobre futuros gloriosos no se funda ni en la realidad ni en fuerzas concretas.

Pero no hay que olvidar que, cuando la nueva burguesía acceda al poder -es un proceso inevitable, ya sea compartiendolo y coexistiendo con los boyardos, o que lo asuma sola-, aquellos cuyo único capital es el saber querrán transformarlo en privilegios materiales. En ese momento, intentarán explotarnos, eso forma parte de su sistema.

Así, si apoyamos actualmente el movimiento de los demócratas -sabiendo que es una verdadera burguesía, de orientación social-demócrata-, no debemos olvidar que, tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos a él. Lo hacemos ya sobre un cierto número de cuestiones.

¿Sentís la necesidad de un partido de los trabajadores?.

No puedo predecir lo que reserva el futuro, pero puedo daros mi opinión personal. Para que una persona sea capaz de definir su posición política, debe haber alcanzado un cierto nivel de conocimientos y estar motivada para hacerlo. Por el momento, debemos aún conducir a los trabajadores a reflexionar sobre ello. Hoy, la mayoría de la gente se preocupa sobre todo de encontrar comida y bebida suficiente. Debemos permitir a los trabajadores percatarse de que son seres humanos. Cuando reciban un salario decente, dejarán de estar obsesionados por el dinero y tendrán tiempo para leer, se ampliará su horizonte; entonces serán capaces de definirse políticamente.

En mi opinión, la creación forzada de un partido de los trabajadores hoy sería una iniciativa utópica, que caería bajo la influencia de la derecha o de la izquierda, por ejemplo, de los marxistas ortodoxos del Frente Unido de los Trabajadores (FUT). Pero tarde o temprano necesitaremos partidos normales, un partido laborista como el británico o un partido socialista. Su necesidad se manifestará en el futuro, pero intentar crearlo ahora sería una pérdida de tiempo. La genta debe antes definirse políticamente.

Parece que se está desarrollando una lucha por la propiedad en la URSS...

A nivel del Estado y de las empresas, se asiste a una lucha sorda y violenta por el poder económico. Tras la huelga de 1989, se votaron leyes sobre alquileres de empresas y sobre compañías por acciones. Muchos directores porpusieron a sus trabajadores gestionar la empresa como propiedad colectiva. Este año, hemos comenzado a preguntarnos por qué un número significativo de directores era favorable a tal gestión. Y hemos llegado a la conclusión siguiente: como el nivel de conocimientos de los trabajadores en materia de derecho y de economía es muy bajo, cuando la empresa se gestiona bajo la forma de propiedad colectiva se hacen aún más dependientes de la dirección. La mina les pertenece, pero no saben cómo dirigirla.

Los directores aprovechan la ocasión de explotar la falta de preparación de los trabajadores para convertirse en dueños de las empresas; antes estaban sometidos a los ministerios y ahora son libres. Después de todo no tienen ningún interés en convertirse en propietarios legales, pues podrían quebrar. Ahora, como la empresa pertenece al colectivo de trabajadores, en caso de dificultades el director puede siempre decirles: “Es vuestra empresa. Vosotros sois los responsables”.

En principio, la instauración de la soberanía de las repúblicas sobre las empresas es algo positivo; pero tiene también aspectos negativos. Las repúblicas dicen a sus trabajadores: todos somos hermanos, el centro nos roba, si tenemos todas las empresas nos haremos ricos. Se descargan así de sus responsabilidades. Las autoridades quieren liberarse de las estructuras que están por encima de ellas, y a la vez conservar sus propios marcos para dominar a los de abajo. Esto pasa en todos los terrenos. Quieren explotar nuestra ignoracia.

La estratificación de la sociedad continúa. De hecho el capital está acumulándose ya, e irá a manos de quienes poseen conocimientos económicos. También en esto se quiere explotar nuestra ignorancia.

¿Piensas que los trabajadores se rebelarán cuando se den cuenta de lo que pasa?.

No lo sé. En ese momento podrá plantearse la creación de un partido.



EL "nuevo orden árabe" y el obstáculo israelí

Salah Jaber

La operación "Tormenta del Desierto" estaba concebida como etapa decisiva hacia un reordenamiento político del Oriente árabe bajo la hegemonía de Estados Unidos. A la guerra americana debía suceder una "pax americana", cuyos elementos han comenzado a ponerse de manifiesto desde el final de las operaciones militares contra Irak. En el centro de este montaje está la alianza de las seis monarquías (1) miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con Egipto y Siria como principales Estados árabes miembros de la coalición anti-iraquí.

El peligro principal para esta "pax americana" regional es, paradójicamente, el Estado de Israel: la intransigencia del gobierno de la derecha sionista, dirigido por Isaac Shamir, ha dificultado en gran medida los esfuerzos desplegados por el secretario de Estado norteamericano, James Baker, para la puesta en pie de un entendimiento árabe-israelí bajo el patronazgo de Estados Unidos.

La Declaración de Damasco

Los representantes de los ocho Estados árabes aliados, reunidos en la capital siria los días 5 y 6 de marzo de 1991, adoptaron la "Declaración de Damasco" que proclamaba un "nuevo orden árabe", cuyo parentesco con el "nuevo orden mundial" de Bush es evidente incluso en el nombre. Los dos principales aspectos de la Declaración son de orden militar y económico. A tenor de la acción común contra Irak, las tropas egipcias y sirias -35.000 y 20.000 soldados respectivamente- presentes en los territorios de Arabia Saudita y Kuwait se mantendrán allí, e incluso se incrementarán (Siria piensa doblar sus efectivos) y desplegarán en otros Estados del Golfo. Estas tropas, según la Declaración, constituyen "el núcleo de una fuerza de paz árabe puesta en pie para garantizar la seguridad y la integridad de los Estados árabes de la región del Golfo". Por más que esta alianza militar se abstendrá de ser "dirigida contra ninguna de las partes", está claro que la seguridad y la integridad de las monarquías del Golfo no están amenazadas actualmente, ni real ni potencialmente, más que por los dos aspirantes a la hegemonía en esta región: Irak, que acaba de sufrir el tratamiento ya conocido, e Irán, que se ve reforzado por la destrucción de su adversario.

De hecho, estos dos Estados se han venido disuadiendo el uno al otro de alterar la estabilidad del orden imperialista y reaccionario en el Golfo. Cuando Irak era una fuente de subversión nacionalista, el Irán del Sha le controlaba. Más tarde, cuando, después de febrero de 1979, Irán se convirtió en centro de la subversión jomeinista, fue Irak quien se erigió en "defensor de la puerta oriental de la nación árabe", llevando a cabo contra su vecino una guerra devastadora de ocho años, con el apoyo financiero de las monarquías petroleras árabes. El giro de Irak contra Kuwait y el enfoque de las ambiciones de Sadam Husein en dirección a sus vecinos árabes situaron a Irán y a Irak, por primera vez desde que existen estos Estados en su forma actual, en el campo de los adversarios del orden imperialista tradicional en el Golfo. Esta situación inédita requería la reestructuración del sistema de protección de los pilares locales de este orden. Se imponía un contrapeso exterior a la doble amenaza iraquí-iraní. La intervención masiva de tropas imperialistas, en particular las de Estados Unidos, tenía como propósito hacer lo que ninguna fuerza local estaba en condiciones de hacer: destruir el potencial militar iraquí. Igualmente, era su intención crear las condiciones políticas e incluso psicológicas necesarias para esa reestructuración. Pero, por razones políticas mezcladas con consideraciones religiosas, la permanencia prolongada de fuerzas masivas occidentales en Arabia Saudí era una opción muy improbable. El mantenimiento de su presencia en un suelo que es considerado por decreto religioso (fatwa) como una gigantesca mezquita, corría el riesgo de transformarse en objeto del resentimiento antioccidental, nacionalista o religioso, de las masas árabes.

Nuevo sistema de seguridad en la zona

En consecuencia, Estados Unidos y sus ricos protegidos del Golfo pusieron a punto un nuevo sistema de seguridad adaptado a las realidades nuevas y a

NOTAS

1.-Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Oman y Qatar.

2.-"International Herald Tribune", 8-3-91.

3.- "IHT", 29-4-91.

4.-El material soviético reemplazado fue vendido o enviado por Egipto a aliados tales como los mujaidines afganos o a los propios Estados Unidos, que utilizan armas soviéticas para el entrenamiento de sus tropas.

las tradicionales. Este sistema consiste en tres escalones, dejando como último recurso la intervención militar norteamericana directa. El primer nivel está constituido por las propias fuerzas de las monarquías del Golfo, que se verán considerablemente reforzadas en el próximo periodo. Los efectivos del ejército saudí se doblarán o triplicarán, hasta llegar a los 100 ó 150.000 soldados en activo, con el probable recurso masivo a mercenarios egipcios, pakistaníes y, posiblemente, marroquíes. El pequeño ejército de Kuwait será igualmente ampliado en los mismos términos.

La clave de todo esto está, sin duda, en el gran mercado garantizado para la industria militar de Estados Unidos, tras la demostración en vivo de la eficacia de sus productos durante la "Tormenta del Desierto".



El nuevo sistema de seguridad regional

Las ventas ya apalabradas por Washington sólo con Arabia Saudita asciendén a la bonita cifra de 10.000 millones de dólares. Probablemente alcanzarán la misma cantidad con Kuwait, que necesita reconstituir gran parte de su arsenal. Respecto a quienes, por ingenuidad o por devoción al Estado de Israel, critican estas ventas de armas y les oponen las propias declaraciones de la administración Bush sobre la necesidad de un control armamentístico en esta región del mundo, hay que recordarles que esa misma administración, con una gran dosis de hipocresía, apostilla que es necesario establecer un equilibrio de fuerzas entre los países árabes de la región (y no entre éstos y el Estado de Israel): "El oficial (del Departamento de Defensa) declaró que la Administración está decidida a aumentar los arsenales de los Estados árabes amigos del Golfo -países que, según añadió, tienen individualmente menos poderío que Irak-. La Administración consideraría la limitación regional de armamento, dijo, sólo en este contexto" (2).

En definitiva, lejos de promover un desarme regional que englobara al Estado sionista, Washington no "consideraría" la congelación de la exportación de armas hacia la región más que después de haber elevado el poder militar individual de sus aliados más seguros hasta un nivel disuasorio para un potencial enemigo comparable a Irak (en clara referencia a Irán). Las únicas armas que la administración Bush está dispuesta a prohibir desde ya son las de tipo NBC (nucleares, bacteriológicas, químicas), así como los misiles balísticos de un alcance superior a los 150 kilómetros (3). Se continuará vendiendo el resto del armamento, incluídos los ingenios sofisticados, a los socios árabes de Washington. Más allá de consideraciones comerciales, Estados Unidos desea realmente consolidar la capacidad de resistencia autónoma de sus protegidos, de cara a enfrentamientos a nivel interno o externo, extrayendo las lecciones oportunas de la gran vulnerabilidad demostrada por ellos en el curso de la "crisis del Golfo". Por lo demás, las ventas previstas no amenazan con modificar la relación de fuerzas regional, dominada claramente hoy en día por el Estado de Israel. Para nadie es un secreto que éste dispone de un importante arsenal de armas NBC y de misiles de alcance diez veces superior al establecido como límite por Washington.

Lo irónico de la situación está en que sea el propio Israel quien pida hoy la congelación de la capacidad militar regional -no un desarme equilibrado- con vistas a consolidar la ventaja que ha logrado con la destrucción de Irak; ahorrando a la economía israelí, comprometida por la inmigración de los judíos de la URSS, el coste de una continuación sin fin de la carrera de armamentos.

El segundo nivel de protección de las monarquías del Golfo está constituído por la "fuerza de paz árabe". De los dos componentes de esta fuerza, el Egipto de Mubarak es sin duda el más seguro actualmente. Ha sido rearmado masivamente por Estados Unidos desde la firma de su tratado de paz con el Estado de Israel, en 1979. El objetivo era reemplazar la dependencia estructural del ejército egipcio de la URSS, mediante una integración en el dispositivo americano, pasando por maniobras conjuntas anuales ("Bright Star"), así como por la renovación del arsenal militar (4). La última entrega de este programa de rearme sometida este año a la votación en el Congreso de Estados Unidos, comprende 46 aviones de la gama alta de los F-16 con su dotación de bombas y misiles.

En cuanto al ejército sirio, continúa estrechamente ligado a Moscú por su material. Su "americanización" no es previsible en un futuro inmediato. Para ello, habría que llegar primero a un tratado de paz sirio-israelí similar al de Camp David y asegurar, por éste o por otros medios, la irreversibilidad de la alianza siria con Estados Unidos. De momento, Damasco es un aliado estrechamente vigilado por parte de Washington, que espera que los intereses económicos del Estado sirio aconsejen a Hafez el-Asad, convencido adepto de la "realpolitik", la decisión de recalar resueltamente en el lado americano, en estos tiempos de bancarrota soviética.

El tercer nivel, el último recurso, es la intervención directa del ejército norteamericano, en particular el despliegue directo de tropas. Antes de la invasión de Kuwait por Irak, el dispositivo militar americano para la región descansaba en gran medida en su aliado israelí y en los ejércitos egipcio y saudita integrados en el sistema regional del Pentágono. Este está dirigido por el CentCom (Central Command), cuyo cuartel general está en Tampa, Florida, y cuyo jefe no es otro que Norman Schwarzkopf. El CentCom podía contar asímismo con los aliados turcos, pero disponía también de sus propias fuerzas de intervención: las bases americanas de Turquía y de Diego García en el Océano Indico; la flota americana en el Golfo, con facilidades en Bahrein, y las flotas próximas, incluída la del Mediterráneo; y la Fuerza de Despliegue Rápido que opera desde Europa y Estados Unidos.

La operación contra Irak puso de relieve la falta de agilidad del despliegue

americano en Arabia Saudita y la gran vulnerabilidad de la primera fase. Los comentaristas militares han subrayado, retrospectivamente, que si Irak hubiera tomado la iniciativa de intervenir en territorio de Arabia Saudita en agosto, para impedir la acumulación de fuerzas de la coalición, Estados Unidos se habría visto enfrentado a una tarea mucho más difícil. El Pentágono ha extraído la lección de esta experiencia. Aunque Schwazkopf confirmó el pasado 24 de marzo que su ejército no tenía intención de dejar una fuerza terrestre masiva permanentemente en la región del Golfo, también anunció que se establecerá en la región un puesto avanzado de mando americano, dependiente del CentCom, probablemente en Bahrein. Este puesto se encargará de la coordinación del dispositivo aliado regional y de la organización de maniobras conjuntas árabe-americanas terrestres, navales y aéreas, lo que supone una presencia frecuente, aunque no permanente, de tropas estadounidenses (5).

A cambio, se verá reforzada la flota americana en el Golfo. Y, sobre todo, el despliegue directo de fuerzas americanas sobre el teatro de operaciones, en caso de urgencia, será mucho más fácil contando con el establecimiento previo del material americano. Están previstos dos emplazamientos: Turquía y, por supuesto, Arabia Saudita. En cada uno de estos países se depositará el armamento de una división fuertemente equipada, de manera que sus efectivos puedan llegar al punto preciso en pocos días. La capacidad mejorada de intervención rápida americana, añadida a la capacidad de despliegue a medio plazo demostrada por el extraordinario esfuerzo logístico llevado a cabo desde agosto de 1990 a enero de este año, que es posiblemente el único logro verdadero de Estados Unidos en la guerra contra Irak, son suficientemente intimidatorios de cara a las potenciales amenazas, desde el punto de vista del Pentágono.

El "nuevo orden" económico regional

Este sistema de tres niveles tiene, como cualquier sistema de seguridad, una función disuasiva al tiempo que otra defensiva y represiva. Los señores del orden imperialista saben que estas dos funciones no bastan para asegurar la estabilidad que ansían. Son perfectamente conscientes de la necesidad de complementarlas con una acción preventiva, tanto más cuanto que los dos primeros niveles no son absolutamente seguros. Las fuerzas armadas de las monarquías del Golfo no han brillado nunca por su eficacia. En cuanto a Egipto y Siria, independientemente de la fiabilidad de sus gobiernos a los ojos de Washington, están expuestos constantemente a riesgos de levantamientos populares que pueden extenderse a sus fuerzas armadas. Su relativa fragilidad política proviene sobre todo de la precariedad de sus respectivas situaciones socio-económicas. Al contrario que las monarquías petroleras del Golfo, que se cuentan entre los países con mayores ingresos (PNB por habitante), estos dos países, en especial Egipto, sufren un grave deterioro del nivel de vida de su población (6), lo que se convierte en una fuente permanente de tensiones políticas y sociales.

Es un problema de la misma clase que el que empujó a Irak a invadir Kuwait, desengañado de la posibilidad de ser financiado por los ricos "países hermanos". Sadam Husein reaccionó, ante la negativa kuwaití a seguir manteniendo su régimen, desarrollando una retórica nacionalista que llamaba a un reparto equitativo de las riquezas de la nación árabe entre todos sus componentes. Por su parte, Siria había arrancado regularmente fondos a las monarquías petroleras del Golfo mediante una extorsión político-terrorista en nombre de la confrontación con el Estado sionista.

La "Tormenta del Desierto" modificó radicalmente este contexto en el que unos Estados ricos, pero vulnerables, cedían ante la presión de otros Estados pobres, pero militarmente fuertes y determinados a ejercer un chantaje. La enérgica intervención de Estados Unidos a favor de sus ricos protegidos ha creado unas nuevas condiciones, en las que las monarquías petroleras se sienten a salvo de cualquier amenaza regional gracias a la protección americana. A pesar de esa ostentosa protección, estas monarquías también han sido fuertemente presionadas por Washington para que continúen dispensando ayuda financiera a los Estados árabes que acepten alinearse con la "pax americana". No se trata ya de la sumisión a las necesidades de unos Estados que no consiguen dominar la subversión, sino de fondos destinados a la consolidación del orden reaccionario, especialmente en los Estados que ofrecen sus servicios como mercenarios.

El segundo aspecto de la Declaración de Damasco nos lleva precisamente a este aspecto de la cuestión. Se funda, por una parte, en "el respeto del principio de soberanía de cada Estado árabe sobre sus recursos naturales y económicos". La Declaración, por otra parte, habla de "reforzar la cooperación económica" entre los firmantes, para extenderla después a otros Estados árabes. La innovación al respecto consiste en que la ayuda de los Estados ricos se adecuará a unas condiciones similares a las que rigen la financiación de los países del Este por parte de los países imperialistas. La finalidad de la

5.-Esto supone también, dicho sea de paso, que los ejércitos aliados se doten de material americano.

6.-La población agipcia aumenta en un millón de personas cada nueve meses.

7.-"IHT", 11-4-91.

8.-"IHT", 6-4-91.

"cooperación económica" está definida en la Declaración: "animar al sector privado (...) a participar en el proceso de desarrollo (...) y permitir a las pequeñas y medianas empresas obtener frutos de la cooperación...". Dentro del espíritu general de esta concepción renovada de la financiación árabe, se han tomado ya, o están en vías de tomarse, medidas concretas: una retribución especial a Egipto y a Siria por sus buenos y leales servicios, y un mecanismo de financiación regional. Siria ha recibido dos mil millones de dólares, que han servido de gran ayuda para un régimen como el baasista al borde de la quiebra. Las necesidades de Egipto son mucho más importantes, en función de sus 55 millones de habitantes y su gran miseria, pero también por las graves consecuencias económicas de la crisis del Golfo en un país con más de dos millones de habitantes trabajando en Irak y en Kuwait, y para el que la mayor fuente de divisas es el turismo.

Las monarquías petroleras árabes y Estados Unidos han hecho un especial esfuerzo por rodear con algodones al barril de pólvora egipcio, ansiosos por salvaguardar a su aliado más dócil. Los primeros han anulado cerca de siete mil millones de dólares de deudas contraídas por Egipto. Washington ha hecho otro tanto con la deuda militar. Además, la administración Bush y sus aliados petroleros ejercen presiones sobre el FMI y las otras instituciones imperialistas para que den un trato de favor a Egipto, bajo el control del Fondo. Cerca de un 30% de los 40.000 millones de dólares de deuda gubernamental egipcia van a ser anulados, y el resto modificará sus plazos. El FMI y el Banco Mundial acordarán dos nuevos préstamos a El Cairo de 300 millones de dólares cada uno.

Este tratamiento de favor, añadido a la generosidad del Club de París y de Washington respecto a la Polonia de Walesa (anulación del 50% y del 70% de la deuda, respectivamente), no dejará de incitar a los países más endeudados, entre ellos el trío latinoamericano (Brasil, México y Argentina), a reclamar facilidades similares. La respuesta anticipada del subsecretario norteamericano del Tesoro, David Mulford, según el cual Polonia y Egipto son "únicos, política y económicamente"(7), indica bien a las claras que tanto la anulación de la deuda como la continuación de la financiación imperialista son concebidas, más que nunca, como certificados de buena conducta.

Las condiciones políticas que Egipto satisface son evidentes. En cuanto a las condiciones económicas, el FMI ha sido el encargado de dictarlas. Como de costumbre, incluyen la supresión de la subvención a los precios de bienes y servicios de primera necesidad. El gobierno de Mubarak ha prevenido ya a la población de que debe esperar fuertes alzas en los precios de la electricidad, gasolina y otros productos derivados del petróleo, entre ellos el transporte, y de los artículos alimenticios básicos, incluidos el pan y la carne. Cada una de las tentativas egipcias de atenerse a los dictados del FMI han provocado revueltas populares, como en la mayor parte de los países del Tercer Mundo sometidos al mismo dictado.

Para amortiguar este golpe, las monarquías petroleras del Golfo están dando ya prioridad a los trabajadores egipcios en la captación de mano de obra árabe, en detrimento de los palestinos, yemeníes y de la gente de los países que no apoyaron a la coalición anti-iraquí; de todos ellos han sido ya expulsados de los países de la coalición más de dos millones de personas. El número de egipcios que trabajan en Arabia Saudita aimentó cerca de un 50% en tres meses, pasando de 684.000 en diciembre de 1990 a cerca de un millón actualmente. El embajador egipcio en Riad declaró que las autoridades sauditas están decididas a reservar a partir de ahora a los egipcios la mitad de todos los visados de trabajo que acuerden(8). Este es el principal beneficio sacado por El Cairo de su actitud política: la inmigración en el Golfo, como es bien sabido, absorbe en parte el paro y constituye la principal fuente de divisas (por transferencias familiares) de varios países.

Un proyecto idílico

Además, Egipto y Siria serán los principales beneficiarios del Programa de Desarrollo puesto actualmente a punto por las seis monarquías del CCG, para el cual se constituirá un fondo de 15.000 millones de dólares, una tercera parte del cual deberá estar disponible inmediatamente. Este programa, dentro del espíritu de la Declaración de Damasco, será llevado mediante métodos inspirados en las relaciones entre el FMI y Europa del Este, en función de la similitud estructural entre unas economías en las que el sector estatal es dominante. Se pondrá el acento en la expansión del sector privado, de forma que se consolide un "nuevo orden árabe" fundado en la libre empresa y en la combinación de capitales del Golfo, mano de obra de sus aliados árabes y capitales y tecnología imperialista, bajo patronazgo americano.

Este proyecto idílico es casi utópico, en vista de la extraordinaria complejidad de los problemas sociales y políticos de la región, buena muestra de la cual es la evolución de la situación en Irak. El principal escollo en el que la "pax americana" corre el riesgo de naufragar en lo inmediato es, a buen seguro, el contencioso árabe-israelí. Este ha sido, desde hace una veintena de años, el principal factor de inestabilidad política en la región árabe y el principal catalizador del resentimiento antiamericano de las masas árabes. Para Estados Unidos, la oposición política entre sus aliados y clientes árabes, por un lado, y el Estado sionista, su socio militar privilegiado, por otro, ha sido el principal obstáculo.

La Declaración de Damasco no podía omitir mencionar este contencioso. Aparentando reiterar la posición árabe oficial ("Conferencia de paz internacional bajo vigilancia de Naciones Unidas" y regulación del conflicto sobre la base de las resoluciones de la ONU para "poner fin a la ocupación israelí de los territorios árabes y garantizar los derechos nacionales del pueblo palestino"), la Declaración introducía dos concesiones evidentes a Washington: por una parte, la "conferencia internacional" no era ya una exigencia, sino únicamente un "marco adecuado"; por otra, no se hacía ya mención de un Estado palestino, sino solamente de los "derechos nacionales" palestinos.

El discurso-programa de la posguerra del Golfo, pronunciado por Georges Bush ante el Congreso de Estados Unidos, el 6 de marzo, algunas horas después de la publicación de la Declaración de Damasco, se hacía eco de él. Reafirmaba la adhesión de su administración a las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU y al principio de intercambio de paz por territorios -es decir, la retrocesión por parte de Israel de los territorios ocupados en 1967 a cambio del reconocimiento por los Estados árabes del Estado sionista y de sus fronteras, y garantías para su seguridad. Se comprometía igualmente a tener en cuenta los "legítimos derechos políticos de los palestinos".

El discurso de Bush daba la señal para una nueva serie de giras regionales de su secretario de Estado, James Baker, al estilo de Kissinger, con la diferencia de que la estrategia de "pequeños pasos" tan querida por este último, tendente a obtener acuerdos por separado con cada Estado árabe y el Estado sionista, no está ya en el orden del día. Porque, en efecto, el frente de los Estados árabes limítrofes con Israel está hoy bajo hegemonía americana, una vez que Siria se ha pasado con armas y bagajes a ese campo. La "Tormenta del Desierto" ha creado un clima político excepcionalmene favorable para los designios de Washington en Oriente Medio, en un momento en que Moscú abdica, por unos puñados de dólares, de toda pretensión de rivalizar con su tradicional adversario.

En estas condiciones, la anterior oposición norteamericana a una regulación global, con participación de la URSS, no tiene razón de ser. Muy al contrario, es la administración Bush la que desea hoy un "package deal" (acuerdo global. NdR.) con todas las partes árabes concernidas y la aprobación de la URSS.

La razón de ello es que el terreno de acuerdo entre Washington y sus socios árabes, con la bendición de Moscú, es actualmene más amplio que nunca. Estos socios, incluyendo a Siria y a la dirección de la OLP, han abandonado toda pretensión nacionalista árabe. En el mismo terreno de entendimiento se sitúa la fracción moderada del "establishment" sionista: laboristas y otros, comprendidos miembros del Likud (bloque de la derecha sionista en el poder), partidarios de una retirada parcial de los territorios ocupados, a cambio de un acuerdo de paz con garantías.

El obstáculo israelí

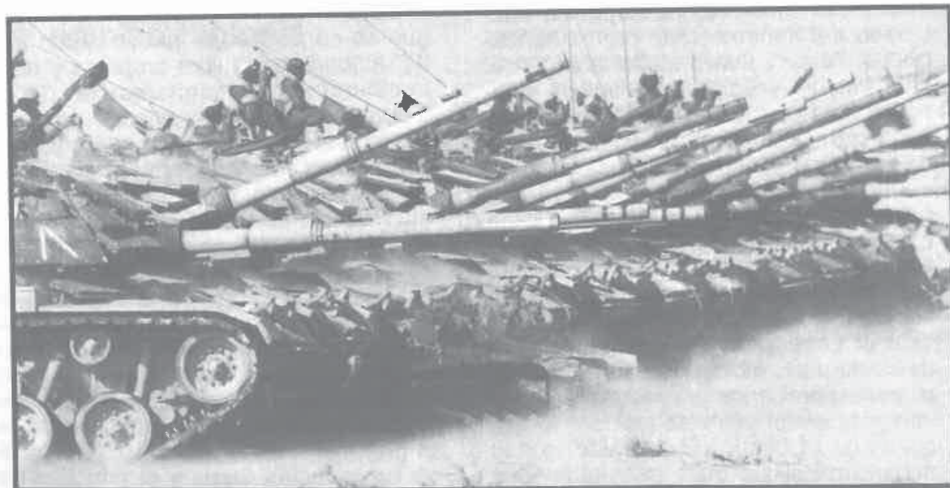
Hay cuatro cuestiones que acotan este terreno: dos cuestiones fundamentales, la del Golan sirio ocupado y anexionado por Israel en 1981, y la de los territorios palestinos ocupados, comprendiendo a Jerusalén Este; y otras dos cuestiones de menor entidad: el marco de negociaciones y el problema de la representación palestina. El contencioso egipcio-israelí ha sido liquidado, y el hecho de que Egipto haya tomado parte en el proceso da testimonio de la solución a lo que desde hace tiempo es el quinto problema, y el más espinoso.

En efecto, el problema del reconocimiento del Estado de Israel, de la garantía para sus fronteras y de la "normalización" de las relaciones con él ha sido ya regulado por El Cairo, colmando las aspiraciones del gobierno sionista. La reintegración plena y entera de Egipto al redil árabe y su estrecha alianza con los miembros árabes de la coalición anti-iraquí, sin cambio alguno en sus relaciones "normalizadas" con Israel, subrayan el hecho de que tales relaciones, que habían valido al gobierno de Sadat un boicot por parte de sus iguales árabes, son aceptadas hoy por estos últimos, incluyendo a Siria, que así lo ha hecho saber a James Baker. Hafez el-Asad se ha mostrado siempre dispuesto a contener los sentimientos nacionalistas de la población siria cuando así cuadraba a sus intereses. Desde su intervención en favor del campo cristiano reaccionario de Líbano en 1976, hasta su reciente implicación con las fuerzas americanas contra Irak, el dictador de Damasco ha mostrado en concreto a Washington que él respetaba las clásulas de los acuerdos que firmaba, a riesgo incluso de tener que enfrentarse a su pueblo. Su actitud hacia Estados Unidos no ha sido nunca arbitraria, sino modulada siempre en función de su política regional.

Cada vez que Estados Unidos ha entrado en la vía de los acuerdos separados, primero egipcio-israelíes, después libano-israelíes (1983) y jordano-palestino-israelíes, amenazando con aislar a Siria en una posición de gran debilidad de cara a Israel, Damasco se ha opuesto a ello. Por el contrario, cada vez que Washington se ha pronunciado por un acuerdo global árabe-israelí, dentro del espíritu de la Conferencia de Ginebra consecutiva a la guerra de octubre de 1973, el poder sirio le ha ofrecido su colaboración. En cada caso, las relaciones sirio-norteamericanas han repercutido en el escenario libanés.

El conjunto de factores políticos y económicos, regionales y mundiales, determinan a Hafez el-Asad a alinearse hoy en el campo de Estados Unidos y de sus ricos protegidos árabes. Esta es la única opción sensata para los intereses de la dictadura burocrática burguesa que dirige. La aquiescencia tácita de Damasco a la paz egipcio-israelí indica igualmente una disposición a darse por satisfecho con un arreglo sobre el Golán ocupado, idéntico a aquél en virtud del cual Israel ha restituido el Sinaí a Egipto: desmilitarización del territorio y garantía americana, con dispositivo de control.

Esto es exactamente lo que busca Washington ahora (9): retirada israelí y desmilitarización del Golán, extensión del mandato de las Fuerzas de las Naciones Unidas al conjunto del territorio sirio ocupado hoy y dispositivo de alerta, probablemente americano (Israel querría que fuese suyo, pero esto es difícilmente aceptable por Siria). El prin-



cipio de un compromiso de esta naturaleza sobre el Golán fue defendido recientemente por el ministro israelí de Asuntos Extranjeros, David Levy, el ministro de Sanidad, Ehud Olmert y el Jefe de Estado Mayor, general Dan Shomron, que hizo una estruendosa declaración en ese sentido un mes antes de retirarse de su vida activa.

Estos hombres, que no tienen nada de "palomas", piensan que el interés estratégico de una paz con Siria es mayor que el mantenimiento del ejército sionista en el Golán. Saben también que la decena de millares de colonos israelíes instalados en la meseta siria no están aferrados a ese territorio árido, y aceptarían voluntariamente abandonarlo a cambio de una compensación financiera adecuada, como la que Estados Unidos ha procurado a los ex-colonos del Sinaí. Piensan, en fin, que un acuerdo sobre el Golán ahorraría un acuerdo sobre Cisjordania (10). El "frente de rechazo" israelí, dirigido por el ministro Ariel Sharon, hoy ministro de la Vivienda, y el ministro de Defensa, Moshe Arens, ha puesto el grito en el cielo contra la idea de un compromiso sobre el Golán, arrastrando tras su estela a Shamir. Algunos diputados laboristas se han unido a los "refuzniks" del Likud, pero su oposición es mucho más fácilmente desmontable.

Los territorios palestinos ocupados

Por el contrario, sobre la cuestión de los territorios palestinos, Cisjordania y Gaza, los laboristas sionistas se sitúan mayoritariamente en el terreno del compromiso favorecido por Washington. La solución promovida oficialmente por la administración republicana, desde el "plan Reagan" de septiembre de 1982, es la de "un autogobierno de los palestinos de Cisjordania y Gaza en asociación con Jordania", de la cual se había hecho eco el acuerdo concluido en Amman entre el rey Hussein y Yasser Arafat, en febrero de 1985, para una confederación jordano-palestina y una delegación común en las negociaciones con Israel (11).

Estados Unidos continúa aferrado a esta fórmula de acuerdo que ofrece, a sus ojos, el máximo de garantías para el control de los territorios palestinos, y que parece aún más creíble dado que la dirección palestina aprobó lo esencial de la misma. Por ello, el rey Hussein continúa siendo, para Washington, una pieza clave de la "pax americana" en la región. La desavenencia entre las dos partes, surgida a raiz de la condena jordana de la agresión contra Irak, no podía durar mucho. De hecho, la administración Bush sabía fehacientemente que el rey Hussein, para salvar el trono, no hacía más que adaptarse a la fuerza a los sentimientos de "su gente". El aumento de popularidad que le ha valido su actitud, tanto entre los jordanos como entre los palestinos, ha sido muy bien recibido de cara al proceso diseñado por Washington (12).

Se comprende así la irritación de la administración cuando el Congreso votó, el mes de marzo pasado, una moción suprimiendo la ayuda económica y militar norteamericana a Jordania (35 y 20 millones de dólares, respectivamente). Bush y sus hombres tuvieron que explicar a los diputados que había un error por su parte en la apreciación de la actitud jordana. El Congreso terminó por dar al presidente poderes para restablecer esta ayuda, siempre que pudiera certificar que iría en interés del acuerdo pacífico regional (13).

La otra pieza maestra de este proceso es, por supuesto, la OLP. Es cierto que Estados Unidos interrumpió, mucho antes de la crisis del Golfo, el diálogo oficial que había establecido con la organización palestina; y que se ha sentido muy poco inclinado, después, a restablecerlo, incitando incluso a sus aliados árabes a boicotear política y financieramente a la OLP. Desde este punto de vista, el reciente encuentro entre el ministro francés de Asuntos Extranjeros y Yasser Arafat -pobre intento de devolverle el lustre al gobierno de Mitterrand ante las poblaciones árabes, especialmente las del Magreb y la población inmigrante en Francia, y de asegurar la participación de París en el proceso regional pergeñado por Washington- no ha hecho otra cosa que irritar a la administración Bush. Esta sabe que la OLP, o más exactamente la dirección de Arafat, hegemónica en las instituciones de la Organización, es la más "moderada" de las direcciones palestinas. No ha aparecido ninguna otra dirección más aceptable políticamente para Washington y que al mismo tiempo esté dotada de un mínimo de representatividad, a pesar de años de esfuerzos, especialmente por parte del rey Hussein, en encontrarla. El propio Hussein lo reconoce ahora, siempre que puede, que no es su intención sustituir a la OLP, sino únicamente trabajar en común con ella.

Las concesiones de Arafat

Hussein tiene tanta más necesidad de colaborar con la Organización cuanto que su reino debe hacer frente a la radicalización de los palestinos que residen en él y que son la mayoría de la población. Esta radicalización está aumentando debido al grave problema de los centenares de miles de palestinos huídos de los Estados árabes del Golfo, sin recursos propios y con menos recursos aún para las familias de Jordania que vivían de sus transferencias. La precaria estabilidad del reino de Hussein es una razón más que lleva a Washington a no ignorar a la OLP.

Por todo ello, la administración Bush espera asegurar, en la medida de lo posible, el aval de la dirección de Arafat al acuerdo que quiere apadrinar. La reunión con los notables de la burguesía palestina de los territorios de 1967, dirigidos por Faisal al-Husseini(14), que está estrechamente ligado política y financieramente a la dirección Arafat, es una muestra dada por James Baker de que él valoraba este aval como indispensable, y con él el de la dirección de la OLP que les respalda, contra la aspiración del gobierno de Shamir de pasar, pura y simplemente, por encima de los palestinos.

Por el contrario, la luz verde dada a estos mismos notables por la dirección Arafat para reunirse con Baker, apenas unos días después del fin de la espantosa masacre de iraquíes por el ejército americano, cuando en tiempos más tranquilos la Dirección Patriótica Unificada de la Intifada había ordenado el boicot al predecesor de Baker, Georges Schultz (15), muestra bien a las claras que la derecha hegemónica en las instancias de la OLP está decidida a ir hasta el final en su política de concesiones permanentes a Washington, con la esperanza de obtener un lugar en la "pax americana" regional. Por otra parte, Arafat no dudó en declarar "positivo" el discurso de Georges Bush del 6 de marzo.

Esta política, y en especial la vía libre dada a los notables para negociar con Baker, es condenada continuamente por la izquierda de la OLP: el FPLP (Frente Popular para la Liberación de Palestina), dirigido por Georges Habache, y el FDLP (Frente Democrático), dirigido por Nayef Hawatmeh. Estos grupos se han opuesto en vano a las decisiones de Arafat en las instancias de la Organización. Las secciones de ambos Frentes en los territorios ocupados han denunciado violentamente la reunión con el secretario de Estado americano, explicando que los esfuerzos de éste están dirigidos a instaurar un acuerdo entre el Estado sionista y la reacción árabe, a expensas de los derechos elementales del pueblo palestino (16). Un comunicado de la sección "del Estado Palestino" del FDLP, fechado el 12 de marzo pasado, afirma que "la aceptación por algunas personalidades palestinas de la invitación de Baker a reunirse con él supone una colaboración con el plan americano-israelí dirigido a aislar a la OLP, y siembra la confusión entre las masas palestinas que continúan apoyando con todas sus fuerzas a Irak contra la agresión americana, máxime cuando las fuerzas de la agresión americana y sus aliados continúan ocupando una parte del territorio de Irak y ejerciendo un chantaje sobre su pueblo". Sin embargo, continúa siendo un gran peligro, como en 1989 y 1990, que el principal beneficiario de los compromisos de la dirección Arafat

sea la corriente integrista palestina, especialmente Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica). En efecto, esta corriente agita una bandera nacionalista, anti-occidental y anti-judía, que le hace aparecer como la única alternativa radical en la OLP, frente a una izquierda marcada por la contradicción entre su propio discurso radical, anti-imperialista y anti-sionista y el compromiso permanente de sus dirigentes en el exterior con la dirección Arafat (17).

Radicalización en Cisjordania y Gaza

Los factores de radicalización de la población palestina bajo la ocupación israelí son hoy más fuertes que nunca, gracias a la combinación de la brutal caída de las transferencias de trabajadores palestinos inmigrados del Golfo y la reducción a menos de la mitad de los trabajadores palestinos en Israel, por decisión del gobierno Shamir. Los palestinos de Cisjordania y Gaza viven hoy una profunda recesión económica y social, agravada más aún por el descenso de las transferencias de la OLP, cuya financiación por las monarquías del Golfo se ha visto interrumpida. El agotamiento económico de los palestinos por parte del gobierno Shamir, cuyo colmo ha sido el aislamiento casi permanente infligido a Cisjordania y Gaza durante la guerra contra Irak, está directamente dirigido a provocar su emigración forzosa. La remodelación ministerial que ha añadido a la extrema derecha gubernamental sionista, favorable a la guerra del Golfo, a un partidario declarado de los "traslados" -eufemismo consagrado para designar la expulsión masiva de palestinos fuera de sus territorios- indica bien a las claras que no se trata de una catástrofe imaginaria, sino de una voluntad existente y operante ya hoy, bajo la forma de lo que se podría llamar una "expulsión de baja intensidad".

El objetivo de esta operación es doble: por una parte, claramente, la inmigración masiva de judíos de la URSS. Con la ignominiosa colaboración de Moscú, Washington y las organizaciones judías norteamericanas, el poder sionista obliga literalmente a los judíos de la Unión soviética, candidatos a la emigración, a presentarse en Israel, contra la voluntad de la inmensa mayoría que desea establecerse en Norteamérica. Mediante este método, el gobierno Shamir preveía que la inmigración soviética pase de 185.000 personas en 1990 a 400.00 este año, esperando un aporte total de un millón de personas en el futuro. El otro objetivo es, por supuesto, la colonización de los territorios ocupados. Se combina con el primero, que crea en Israel una presión socio-económica susceptible de llevar a un número creciente de israelíes a aceptar los numerosos privilegios ofrecidos a los candidatos a la colonización. El ministro de Vivienda, Ariel Sharon, es el más beneficiado: con el nombre de Proyecto Inmigración, prevé construir más de 10.000 nuevas viviendas para colonos en los territorios de 1967, cerca de 7.000 de ellas en Cisjordania, 2.000 en Jerusalén Este y 1.000 en el Golán. Sharon no se contenta con aumentar los asentamientos existentes; crea incluso otros nuevos, violando así las promesas hechas antaño a Washington.

Controlar a Israel

En comparación con estos actos del gobierno Shamir, la inflexibilidad sobre las cuestiones de procedimiento de la "conferencia internacional", rebautizada ahora como "regional", y sobre la participación de los palestinos de Jerusalén Este en las negociaciones (18), no es más que una expresión superficial de la oposición fundamental a toda perspectiva de restitución de los territorios árabes ocupados en 1967. James Baker ha manifestado su descontento y el de su administración, con la que se alinea frente a la actitud de la derecha sionista. Constata amargamente que, como se afirma al comienzo de este artículo, el Estado de Israel, el aliado privilegiado y mimado de Estados Unidos, se ha convertido hoy en día en el principal obstáculo para la "pax americana" en Oriente Medio. Sin embargo, Washington no tiene ninguna intención de tirar la toalla: sus intereses son demasiado importantes en esta parte del mundo.

La administración Bush intentará saltar el obstáculo ejerciendo un chantaje económico sobre el poder sionista. Este practica una política marcadamente por encima de sus medios. La absorción de inmigrantes procedentes de la Unión soviética le plantea enormes problemas económicos, que hacen que haya tenido que revisar a la baja, en 200.000 ó 300.000 personas, la inmigración prevista para este año. La economía israelí y el nivel de vida de la población están en un pronunciado declive. El Banco Central de Israel ha hecho sonar la alarma: el paro podría alcanzar al 20% de la población activa a corto plazo y provocar una emigración masiva, anulando los efectos de la inmigración proveniente de la URSS (19). Por ello, Estados Unidos tiene buenas razones para esperar poder someter a su niño revoltoso de Oriente Medio. Probablemente, Washington intentará provocar la división del gobierno Shamir y crear las condiciones para una vuelta al poder de una coalición más "moderada", incluyendo a sus dóciles aliados, los laboristas. En cualquier caso, lograr la "pax americana" no es cosa de un par de días y será frágil, si es que llega a ver la luz.

Traducción: A. Flórez.

17.-"Inprecor" francés nº 281, 6-2-91.

18.-Estados Unidos desearía solucionar el problema de Jerusalén Este declarándolo "ciudad abierta" bajo control internacional, proyecto apoyado por el Vaticano.

19.-"Financial Times", 24-4-91.

Hungría

Del "comunismo" del gulash al capitalismo real

Henri Wilno

El caso húngaro muestra las particularidades de cada situacion nacional en las evoluciones actuales de Europa central y oriental. El proceso de reformas económicas húngaro es anterior al que se esta produciendo en otros países de Europa del Este. Al principio, el movimiento de transformación del sistema existente fue impulsado por la burocracia. Pero entró en crisis abierta en el decenio de los 80: crisis económica con aumento del endeudamiento, y crisis política con el estallido del multipartidismo que no aceptaba los límites fijados por arriba. Desde 1988-1989, antes incluso de la llegada al poder de una mayoría política conservadora en las elecciones de abril de 1990, hubo una inflexión en el sentido de un movimiento de transición hacia el capitalismo, marcado por polarizaciones internas en el aparato.

Tras el aplastamiento por los soviéticos de la revolución de 1956 y un periodo de represión, los dirigentes húngaros se vieron obligados a llegar a una forma de modus vivendi con la población. Se admitió una flexibilización política limitada, simbolizada por la fórmula del secretario general del Partido, Janos Kadar: "Quien no está contra nosotros, está con nosotros"; pero el partido único no vió limitado su poder. El compromiso cuasi explícito con la población se basaba en el mantenimiento del sistema político a cambio de mejores condiciones de vida que en el resto del bloque del Este: el "comunismo del gulasch".



Hungria, 1991

El "nuevo mecanismo económico"

En condiciones de desmovilización popular, fueron introducidas, a partir de 1968, medidas de extensión del papel del mercado: el "nuevo mecanismo económico" (NME), que suprimía la gestión administrativa de la economía e instauraba una cierta autonomía de las empresas del Estado en sus decisiones de producción. En el marco de los objetivos generales de la planificación a largo plazo y de la política económica gubernamental, las empresas tomaban sus decisiones de producción en función de "reguladores", es decir de normas en materia financiera, de precios, de salarios y de comercio exterior. La inversión permanecía controlada por las instancias centrales. Por otra parte, el NME no afectaba a la propiedad del Estado (que no se trataba de privatizar, aunque las actividades privadas fueron progresivamente autorizadas), ni de la permanencia de Hungría en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) (aunque se intentó una mayor inserción en el mercado capitalista mundial).

Hubo retrocesos entre 1972 y 1978, pero, tras este periodo, se otorgó un papel cada vez mayor a los mecanismos de mercado. El modo de formación de los precios fue modificado y liberalizado, se instauró una diferenciación más importante de los salarios, disminuyó la parte de las inversiones decidida centralmente. Los Ministerios de rama (encargados del control de las empresas que producían el mismo tipo de productos en las economías planificadas de tipo soviético) fueron efectivamente suprimidos, mientras las grandes empresas del sector estatal eran fraccionadas en unidades de tamaño más reducido. El sector privado fue autorizado, incluso fomentado en el comercio y la artesanía. En la práctica, el control de la burocracia central sobre la economía continuaba subsistiendo a través de una multiplicidad de reglamentos administrativos y el control en última instancia de las inversiones estratégicas; una ley de 1984 transfería

los poderes de gestión de las pequeñas y medianas empresas (que representan el 75% de las empresas húngaras) del Estado hacia consejos de empresas nuevamente creados. En su conjunto, estas medidas apuntaban más al desmantelamiento del monopolio del Estado que a una lógica de autogestión obrera. En un contexto en el que los trabajadores están masivamente ocupados por la búsqueda de un segundo empleo, los consejos de empresa no tienen prácticamente autonomía en relación a los dirigentes efectivos.

Durante este periodo, fue imponiéndose crecientemente entre los economistas la idea del mercado como regulador de la economía, lo que implicaba romper las estructuras de monopolio; para una buena parte de entre ellos, se trataba aún de un "socialismo de mercado" o de un "socialismo de empresa", en el que los medios de producción no serían privados, sino gestionados por consejos de empresa. Pero cada vez más se desarrollaba una corriente liberal marcantil para la que la privatización era la única condición del buen funcionamiento del mercado.

Seguía planteada, en este marco, la cuestión del poder político. En la Hungría de Kadar, se trataba siempre del poder (atemperado, pero persistente) del partido único en la vida política y las decisiones económicas generales. Todo balance serio (en una óptica socialista) del "nuevo mecanismo económico" debería tomar en cuenta la articulación de todos sus aspectos: el mercado, el papel de la burocracia central en materia económica y el mantenimiento del monopolio del partido.

Los resultados de esta política fueron más bien reducidos en el terreno económico y muy negativos en el terreno social. La inversión industrial decayó en el sector estatal; hubo también casos de despilfarros y de mala orientación (industria extractiva y producción energética) de la inversión. La salida garantizada por las compras soviéticas animó a algunas empresas a continuar produciendo bienes de calidad mediocre; pero en ciertos sectores, la industria húngara obtuvo algunos éxitos. En la agricultura, la situación era globalmente satisfactoria y permitía a Hungría escapar a los problemas de aprovisionamiento crónicos de otros países del Este.

Los despilfarros de la gestión burocrática descentralizada y la preocupación política de permitir un nivel de vida más elevado que en los demás países de la zona condujeron a un alza importante del endeudamiento: éste es actualmente de alrededor de 20.000 millones de dólares, es decir, el endeudamiento por habitante más elevado de la región.

La inflación se desarrolló debido a la política de reducción de las subvenciones y de liberalización de los precios. Resultó de ello un fuerte deterioro del poder de compra de los salarios; sólo el desarrollo de las actividades privadas y la ocupación frecuente de un segundo empleo permitió el aumento del consumo de los hogares. El alza del nivel de vida medio fue acompañado de un deterioro de las condiciones de vida: autoexplotación por el segundo empleo, crisis de alojamiento, alza de los suicidios y enfermedades diversas. Más alla de los medios, hay que señalar el aumento del número de los marginados: en 1989, 1 millón de personas (el 10% de la población) vivían por debajo del umbral de pobreza y 1,5 millones estaban en el límite de ese umbral. Entre ellos, se encuentran los parados y los jubilados. Entre 1980 y 1987, el poder de compra medio de los jubilados bajó en más del 25%; una gran parte de ellos se vió obligado a coger un trabajo mal pagado, recurrir a la ayuda social de urgencia (un cuarto de ellos en 1988), incluso a robar (en 1987, la mitad de los robos cometidos por personas de edad eran bienes de primera necesidad). Durante este tiempo, los privilegiados del régimen y los nuevos ricos del sector privado se hicieron construir lujosas residencias en los barrios residenciales de Budapest.

La situación económica se deterioró a partir de 1985: el crecimiento se hizo negativo o casi nulo durante los años siguientes (con excepción de 1987); las cargas de la deuda cada vez más pesadas, superando ya el 50% de las facturas de la exportación. La política gubernamental se inspiraba cada vez más en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional(FMI): el plan de austeridad de 1987 se tradujo en una nueva agravación de las condiciones de vida de la población. Esta política de austeridad forjará la crisis de legitimidad del régimen kadarista.

El giro

A partir de 1987-1988, aumentaron los enfrentamientos en los círculos dominantes del régimen burocrático con una serie de decisiones dirigidas en una lógica de restauración capitalista. Esta evolución se hizo bajo la presión del descontento popular y del aumento de las dificultades económicas, acentuando la fuerza de las presiones y la ingerencia del FMI. Se habían desarrollado ya movimientos sobre el tema ecológico y el problema de la pobreza; la glasnost en la URSS, la aspiración al fin del monopolio del aparato del Partido sobre los resortes esenciales del poder se conjugaron con la reafirmación de la identidad nacional. Se desarrollaron importantes manifestaciones en marzo (con ocasión de la Fiesta Nacional) y en junio de 1988 (en el 30 aniversario de la ejecución de Imre Nagy, jefe del Gobierno durante la insurrección de



Hungria,1956

1956). Los grupos políticos de oposición comenzaron a estructurarse. El compromiso político del post-1956 comenzaba a agrietarse cada vez más.
En este contexto, se acentuaron las diferenciaciones en el seno del grupo dirigente: en abril de 1988, Janos Kadar emprendió la ofensiva contra los elementos reformadores, pero la Conferencia del Partido en mayo de 1988, le reemplaza por el primer ministro Karoly Grosz. A partir de septiembre de 1988, la lucha abierta reapareció con los reformadores dirigidos por Imre Pozgay y Rezso Nyers. Bajo su presión (teniendo como transfondo el descontento de la población), el Partido Socialista Obrero Húngaro (PSOH) reconoció la insurrección de 1956 como un levantamiento popular, aceptó el multipartidismo y emprendió (de junio a septiembre de 1989) negociaciones con la oposición para la puesta en pie de un régimen parlamentario. Una nueva Constitución fue finalmente proclamada en octubre de 1990. Esta huída hacia adelante no evitará la descomposición del ex-Partido Comunista que estalló en su Congreso de octubre de 1989: la mayoría reformadora formó el Partido Socialista Húngaro (PSH), mientras que una minoría con Karoly Grosz conservó el nombre de PSOH. En las elecciones de marzo y abril de 1990, el PSH obtuvo 8,5% de los votos, muy por detrás de los dos partidos vencedores: el Foro Democrático (42,3%) y la Alianza de los Demócratas Libres (23,8%). Estas dos formaciones se pronunciaron claramente por el regreso a una economía capitalista; el Foro Democrático es más prudente en los ritmos, su propaganda tiene aspectos más populistas y nacionalistas.

Las medidas del nuevo Gobierno

Los acontecimientos políticos tienen su vertiente económica y los dirigentes "comunistas" aún en el poder van a darle una inflexión a su política en un sentido restauracionista. El sistema bancario fue reformado en una lógica de competencia y se pusieron en pie los elementos de un mercado financiero. La liberalización de los precios y del comercio exterior se acentuó. La Ley sobre las sociedades, que entró en vigor en 1989, suprimió las trabas a la creación de empresas privadas (de menos de 500 asalariados) e instauró la posibilidad de poner en pie sociedades mixtas con capitales extranjeros, lo que abre la puerta a "privatizaciones espontáneas" de empresas nacionales dirigidas por las direcciones actuales y en su beneficio. En enero de 1989, el Gobierno anunció su intención de privatizar 51 empresas del Estado, que representan alrededor de la cuarta parte de la producción industrial.

Así, la coalición conservadora que llegó al poder tras las elecciones hereda de una Hungría ya dotada de lo esencial del marco jurídico para su mutación. Los problemas dominantes de la política económica residen en adelante en la privatización del sector estatal y en la gestión coyuntural y social de la transición. Las oscilaciones de la política gubernamental dan fe sin embargo que la cosa no es fácil.

Los meandros de la privatización.

Desde el comienzo, en efecto, se han manifestado divergencias en el seno del Gobierno sobre los ritmos y las modalidades de la liberalización de la economía. Estas divergencias han llevado, a fines de 1990, a la dimisión del ministro de Finanzas, Ferenc Rabar, partidario de una acelaración del movimiento y de una reducción drástica de las subvenciones, que no obtuvo el apoyo del resto del gobierno en la preparación del presupuesto para 1991. En el trasfondo de este debate, hay temores sobre el estado de ánimo de la población. La huelga de los taxis y los chóferes que ha paralizado Budapest en noviembre de 1990 (y que ha obligado al gobierno a recular parcialmente en el alza del precio de los carburantes) ha constituído una advertencia. El poder parece, por el momento, seguir relativamente prudente sobre la declaración de quiebra de empresas deficitarias que se traduciría en despidos masivos. Sin embargo, la liquidación de siete sociedades sobreendeudadas ha ya sido decidida y hay despidos en curso en la siderurgia. Pero no sólo está el riesgo de reacciones populares, existe también incertidumbres sobre el camino a seguir para volver al capitalismo. El problema de las privatizaciones constituye un ejemplo de ello: ¿cómo avanzar hacia el capitalismo cuando no hay casi burguesía?

En septiembre de 1990 fue votada la Ley sobre la privatización del comercio al por menor: alrededor de 10.000 empresas deberían ser privatizadas. Por otra parte, el comercio privado está autorizado en Hungría desde hace varios años: en 1988, alrededor del 30% de las empresas eran privadas. La privatización de las tierras agrícolas se ve más difícil en razón de la insistencia de uno de los partidos de la coalición gubernamental sobre la restitución a los antiguos propietarios.

Pero la cuestión más compleja es evidentemente la de las grandes empresas (alrededor de 2.000, cuyas tres cuartas partes están gestionadas por consejos de empresa, dependiendo las demás de los Ministerios). Dos controvertidas cuestiones están ligadas a ello: la apertura al capital extranjero (en efecto, el ahorro húngaro no podría, parece, cubrir más que aproximada-

mente el 10% de esas privatizaciones, lo que es muy insuficiente, incluso añadiendo los recursos del sector privado paralelo) y, de otra parte, el lugar de las direcciones actuales de las empresas en este proceso. Esta cuestión remite a un debate político y teórico que divide a economistas y políticos húngaros: ¿hay que dejar a los dirigentes actuales transformarse en "managers" de tipo capitalista?. Es decir dejarles total amplitud sobre la gestión de la empresa, la asociación con otras empresas húngaras o extranjeras, incluso la transformación de su estatus.

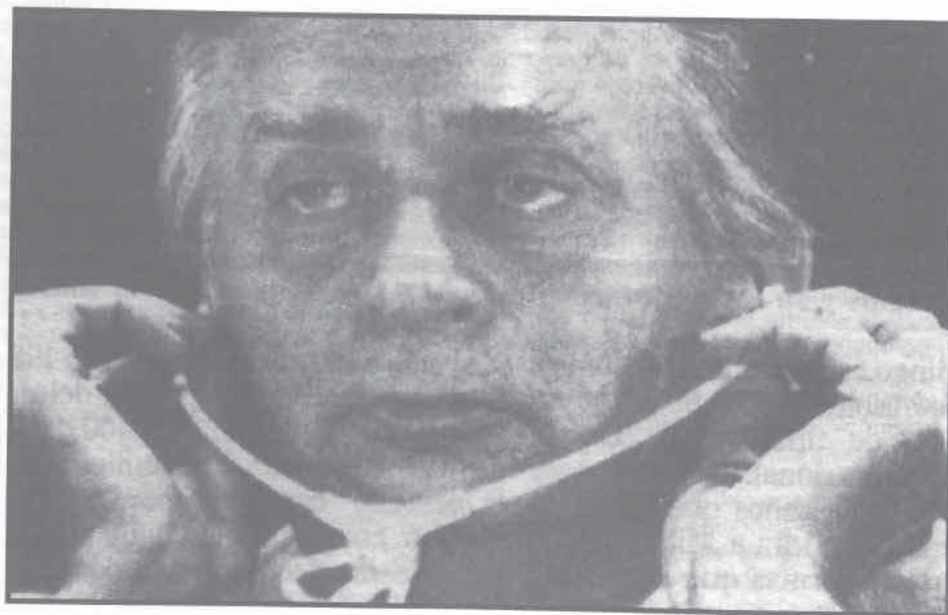
En el espíritu de sus defensores, esto permitiría alinear rápidamente la gestión de las empresas húngaras con las de las economías capitalistas clásicas. Esta posición suscita diversas oposiciones: algunos denuncian su aspecto inmoral (los privilegiados del régimen precedente se reclasificarían ventajosamente), otros (como Janos Kornai) subrayan que una econmía capitalista supone la existencia de una verdadera burguesía, y que ésta no se crea por arte de magia (la privatización debe ser un "proceso orgánico"); no se debe, según él, "vender a buen precio" el sector público a sus actuales dirigentes, sino apoyar (con la ayuda del crédito) el desarrollo de un verdadero sector privado capaz de comprar las empresas estatales.

En un primer momento, los dirigentes de empresa han jugado un papel esencial. Como he señalado antes, la Ley sobre las sociedades de 1989 da la posibilidad a los consejos de empresa (controlados por los cuadros dirigentes) de transformar a éstas en sociedades comerciales y establece las condiciones de apartura del capital de estas sociedades a los inversores extranjeros, lo que ha abierto la vía a "privatizaciones espontáneas". Las primeras operaciones se han desarrollado en condiciones poco claras y parecen haber estado marcadas a veces por una subvaloración de las empresas afectadas y por la preocupación de los dirigentes de sacar el mayor partido posible de su situación.

¿Cómo controlarles?

Las protestas de la opinión pública han llevado a la creación en marzo de 1990, de una Agencia de la Propiedad del Estado, destinada a controlar los procesos de privatización. El producto de la privatización es repartido: el 20% queda en el presupuesto de la empresa, el 80% va al Estado. Son posibles tres modalidades de compromiso en una operación de privatización: la iniciativa puede venir de la Agencia de la Propiedad del Estado ("privatización activa"), de la misma empresa (privatización "espontánea") y del potencial comprador. En todos los casos, la decisión corresponde a la Agencia. Esta ha publicado listas de empresas de las que toma la iniciativa de proponer su privatización. Estas listas comprenden en lo esencial empresas en situación favorable. Más tarde deberían venir las firmas en posición más difícil.

Estamos, parece, en vísperas de un nuevo movimiento de péndulo. El nuevo ministro de finanzas, Mihaly Kupa, ha reclamado recientemente una aceleración de la privatización y ha criticado el comportamiento de la Agencia (acusada de estar más preocupada por salvaguardar los intereses del Estado que de vender). Ha anunciado una mayor apertura al capital extranjero planteando "una privatización parcial de la privatización". Esto parece querer decir que se dejará un mayor margen de maniobra a los dirigentes actuales de las empresas.



Jozsef Antall